

Menos del 10% de los directivos de grandes empresas en la OCDE son mujeres

De las 500 principales multinacionales del planeta, las que contaban con al menos tres mujeres en sus juntas directivas obtuvieron un 16,7% de rendimiento sobre el patrimonio, mientras que las compañías promedio apenas llegaban al 11,5% de rendimiento. Las mujeres sólo representan un 9,8% de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas en la OCDE, con notables diferencias entre Noruega, donde el porcentaje es del 38 %, y Alemania o Japón que no llegan al 5 %.

Según las cifras publicadas hoy, por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se sitúan, además de Noruega, sobre todo Suecia (19,3 %), Francia (18,1 %) y Eslovaquia (17,8 %).

También superan el umbral del 10 % pero sin llegar al 15 % otros Estados: Finlandia (14,9 %), Estonia (12,3 %), Islandia (12,2 %), Estados Unidos (12 %), Eslovenia (11,8 %), Bélgica (10,8 %), España (10,6 %) y Luxemburgo (10 %).

Por su parte, no llegan al 5 % Holanda (4,8 %), Japón (3,9 %), Alemania (3,5 %) y sobre todo la República Checa (0,2 %), de entre los miembros de la organización para los que hay datos.

Las estadísticas datan de 2009, son las más recientes que permiten comparaciones y, según la OCDE, ilustran que las mujeres "siguen estando infrarrepresentadas" en los puestos directivos de las grandes compañías.

Los datos se hicieron públicos coincidiendo con la fecha en que la Unión Europea debe anunciar nuevas medidas para mejorar la paridad entre hombres y mujeres en los comités de dirección.

A ese respecto, la OCDE recordó que España, Islandia, Francia, Holanda, Bélgica e Italia han legislado para promover la igualdad, con objetivos de elevar su porcentaje a horquillas de entre el 20 % y el 40%.

La organización recalcó también que si bien no hay una prueba de que una mayor presencia femenina en los órganos de decisión de las empresas mejora sus resultados, cada vez está mas reconocido que permitiría explotar los talentos potenciales.

El conocido como el "Club de los países desarrollados" ha lanzado un "navegador de la paridad" dentro de una iniciativa sobre la presencia de las mujeres en la sociedad, y centrado en particular en tres aspectos "determinantes" para el crecimiento económico: la educación, el empleo y el mundo de la empresa. (EFE) (Dinero.com)



Mexico: Homicidio industrial

Por Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del SNTMMSRM

El próximo 19 de febrero de 2012 se cumplen seis años de la tragedia que enlutó a 65 familias de trabajadores mineros, al ocurrir una terrible explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. Son seis años del homicidio industrial, como lo calificó entonces, que se cometió por parte de la empresa Grupo México y de su presidente Germán Larrea; su cuerpo directivo, encabezado por Xavier García de Quevedo, y su consejo de administración, al haber obligado a los trabajadores a laborar en condiciones totalmente inseguras e inhumanas, a pesar de todas las quejas, protestas y paros que el sindicato nacional de mineros, que honrosamente presido, interpuso para presionar a la mancuerna de Larrea y García de Quevedo a cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo (artículo 68); en la Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción 17), y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, fracción 14).

Se trata de seis años de impunidad, complicidad y protección hacia Larrea y Grupo México por parte de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ninguno de los tres –Larrea, Fox o Calderón– se presentó en la mina, ni para dar las condolencias a los familiares y mucho menos para ofrecer los apoyos técnicos, materiales y financieros que se requerían para el rescate de mineros, dejando desamparadas a las familias.

Adicionalmente, al quinto día de la explosión se apresuraron a cerrar y sellar la mina, impusieron al Ejército para terminar de un golpe la continuación de las tareas de rescate y se retiraron cobardemente del lugar, tanto el ingeniero químico y proveedor de Grupo México en sus empresas privadas de San Luis Potosí, Francisco Javier Salazar, improvisado por Fox como secretario del Trabajo, como los administradores de Grupo México dirigidos por el sumiso García de Quevedo.

Los dejaron a tan sólo 120 metros de profundidad, donde todavía se encuentran este día los cuerpos de 63 de ellos. Querían evitar que se conocieran las causas de la explosión y del derrumbe de la mina, las pésimas condiciones de inseguridad y la falta de salud e higiene que prevalecían, producto de la irresponsabilidad cómplice entre autoridades y empresarios generada por la corrupción compartida.

Para contrastar mejor esa miserable actitud de Larrea y de Grupo México, recordemos que en Chile en 2010, con un gobierno conservador como el actual de México, se logró el rescate de 33 mineros con vida atrapados en la explosión y el derrumbe del 5 de agosto de ese año en la mina San José de Atacama, cercana a San José de Copiapó, en la montaña, en terreno de roca dura, a más de 700 metros de profundidad, a diferencia del terreno suave y plano de Pasta de Conchos. Los mineros de allá fueron encontrados vivos al día 17 de iniciadas las tareas de rescate y nunca los abandonaron, como sí sucedió en Pasta de Conchos al quinto día de la tragedia, condenándolos a la muerte e iniciando de inmediato una persecución política con base en falsas acusaciones contra los dirigentes sindicales mexicanos. Grupo México, de Larrea, y el gobierno de Vicente Fox en complicidad, crearon una cortina de humo para desviar la atención sobre su grave negligencia criminal, pero el rescate en Chile los exhibió ante todo el mundo.

En el país andino, el rescate exitoso duró 69 días, actitud que no vimos en México. Para ilustrar todavía más la mezquindad de Larrea y socios, en Chile negociaron una compensación cercana a un millón de dólares para cada trabajador, mientras que en Pasta de Conchos les ofrecieron en forma indigna y humillante 75 mil pesos, cerca de 7 mil dólares, para cada una de las familias. En contraste, en la mina de carbón de Upper Big Ranch de West Virginia, Estados Unidos, que estalló en abril de 2010 y 29 mineros murieron, el presidente Barack Obama estuvo en varias ocasiones en el lugar del siniestro y se indemnizó a cada familia con 3 millones de dólares.

Germán Larrea al igual que sus socios y cómplices son como unos cuerpos sin alma, sin principios, sin sentido de culpa y mucho menos de responsabilidad personal, social, civil o penal sobre sus actos. La vida humana ajena para ellos no tiene ningún valor. A raíz de esa vergüenza nacional e internacional, las poderosas organizaciones sindicales mundiales acordaron realizar este año, del 19 al 25 de febrero, intensos Días de acción y lucha más enérgicos que los de 2011, para denunciar al gobierno de Felipe Calderón por inacción, por la represión y las violaciones a los Convenios Internacionales sobre el respeto al Derecho de Asociación, a la Autonomía y a la Libertad Sindical. Los argumentos son evidentes, la situación de los trabajadores en México se ha deteriorado, los sistemas abusivos de contratos de protección se han extendido, la intimidación física, legal y la tortura psicológica contra los trabajadores se ha reforzado, actuando en complicidad las corporaciones y el gobierno.

El mundo los está observando y los ha condenado. Los organismos sindicales internacionales están movilizándose con actos de protesta frente a embajadas y consulados de México y escribiéndole cartas a Felipe Calderón para que detenga esta agresión y respete los derechos laborales y humanos. De no ser así, las acciones se elevarán hasta que se detengan los abusos de poder, la corrupción y las constantes violaciones al estado de derecho. Esa clase de empresarios, el PAN y Calderón deben de inmediato corregir sus acciones contra el pueblo de México, antes de que se les termine el tiempo y la condena contra ellos se sostenga permanentemente, hasta llevarlos a juicio. (*La Jornada*, 16.02.2012)

Canadá: Trabajadores de Alcan protestan

El viernes pasado, 17 de febrero, los miembros del Local 9490 del Syndicat des Métallos d'Alma del United Steelworkers (USW), llevaron su lucha contra Rio Tinto Alcan a la mayor ciudad de Québec, donde la Directora General de Alcan, Jacynth Côté, formaba parte de un foro supuestamente sobre los jóvenes con empleo, patrocinado por la Cámara de Comercio de la metrópolis de Montreal.

Unos 200 de los 780 trabajadores metalúrgicos de la fundición de aluminio Alma de Alcan en la región de Saguenay-lac-Saint-Jean, Québec, subieron a los autobuses que les llevaron los 460 kilómetros hasta Montreal para realizar una ruidosa protesta delante del local donde se efectuaba el almuerzo empresarial. Ésta es la primera manifestación que el sindicato realizaba fuera de la planta de fundición, que produce 488.000 toneladas de metal al año. Se unieron a ellos otros 100 trabajadores siderúrgicos de Montreal, y unos 100 estudiantes universitarios que se incorporaron a la manifestación del USW, una en protesta burlona sobre la temática "futuro de la juventud", donde los empresarios están de la mano con el gobierno liberal de la provincia de Québec en planes para aumentar las tasas de matrícula de la universidad.

Se había publicitado este tema en el "HotIssues@Lunch" supuestamente para "promover el éxito de la próxima generación de los quebequenses". El Syndicat des Métallos d'Alma consideró profundamente irónica la participación de Jacynth Côté, ya que, en Alma, Alcan había recurrido a un cierre patronal para reemplazar empleos permanentes con remuneración de C\$36 la hora con trabajadores tercerizados y presumiblemente más jóvenes, con un salario de C\$16 la hora.

No se esperaba que en la ocasión del almuerzo Côté se dirigiera a los trabajadores víctimas del cierre patronal. Pero cuando se vio presionada por los periodistas que observaban el acto, calificó el conflicto como un "problema regional" que "será arreglado en Saguenay-lac-Saint-Jean" por los administradores en quienes, dijo, "confío plenamente."

A principios de la semana pasada, cuando el cierre patronal llevaba siete semanas y la remota región minera y de manufacturera comenzaba a sentir los efectos económicos de la pérdida de una base salarial, uno de los administradores locales de la empresa le dijo a Reuters que "en ese momento no podía señalar una fecha (para reiniciar las conversaciones) porque no se ha programado nada al respecto".

Como los precios del aluminio están muy bajos en este momento, el cierre patronal de Alma sirve como una estrategia que conviene a la empresa para restringir la oferta con el fin de elevar los precios. También se ajustaba muy bien a la estrategia de Rio Tinto de desinversión y devaluación de Alcan por C\$8,9 mil millones, en vista de su adquisición de la compañía canadiense en 2007, por US\$39 mil millones, aunque es probable que no se va a deshacer de la moderna planta de fundición de Alma, que cuenta con avanzada tecnología, y suministro hidroeléctrico de bajo costo. (...) (ICEM Brief, 22.02.2012)

Chile: Grupo ETEX: otra víctima fatal

La **Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera**, ICM lamenta el sensible fallecimiento del compañero Luis González Valenzuela, dirigente sindical del sector de materiales de la construcción en Chile. El compañero González Valenzuela, tesorero de su sindicato base y gran activista sindical se encontraba desempeñando su labor de "seleccionador" de los productos elaborados por la planta ladrillera, Industrias Princesa Ltda. parte del Grupo ETEX, que además está conformado por otras siete plantas en todo el país. Este holding, con sede en Santiago, es en la actualidad una de las 50 mayores empresas de Chile, y cuenta aproximadamente con 3.000 empleados.

Luis González Valenzuela, tenía 54 años de edad y le sobreviven 4 hijos, el menor de ellos de 11 años. Su cargo oficial era el de operador de maquinaria apiladora de ladrillos que alimenta los hornos de la planta. El accidente se produjo aproximadamente a las 13:00 horas del día de hoy jueves 23 de febrero cuando una máquina neumática le aprisionó su cuerpo. Sus compañeros se percataron del accidente minutos después pues operaba la maquinaria solo y en un espacio alejado.

Tenía 21 años de antigüedad en la empresa, ocho de los cuales se destacó como dirigente sindical. El Sindicato de Industrias Princesa Ltda. (ETEX) es parte de la Red ICM de Sindicatos de EMN de Materiales de Construcción, capítulo Chile y González Valenzuela fue uno de sus activistas mas destacados.

La información suministrada por el Coordinador del Proyecto de la Red de Sindicatos de EMN de Materiales de Construcción, compañero Luis Salazar, destacó que el accidente fatal no es el primero en la planta ladrillera, hace cinco años en esta misma empresa, un trabajador tercerizado que realizaba labores de aseo también falleció producto de un accidente laboral.

Colômbia: As multinacionais atentam contra os direitos

**A criminalização dos movimentos sociais
Sindicalista colombiano pede solidariedade internacional
ativa**

**O afã insaciável das multinacionais na Colômbia por
adquirir empresas estatais, controlar territórios e
explorar recursos naturais leva a uma crise crescente dos
direitos trabalhistas e das garantias sindicais.**



Na realidade colombiana atual, o apoio da comunidade internacional é essencial para "acompanhar e reforçar a vigência dos direitos humanos, trabalhistas e sindicais", enfatiza o dirigente sindical Álvaro Veja, durante sua recente estadia na Suíça.

Respeitar convênios da OIT

Veja, denunciou também as práticas das multinacionais que, priorizando seus interesses econômicos, desconhecem a legislação interna e convênios assinados pelo governo colombiano ante a Organização Internacional do Trabalho (OIT), como o 87 e o 98, referidos aos direitos de associação e negociação coletiva.

"Queremos que sejam conhecidas, em âmbito internacional, situações que requerem da solidariedade externa dada a falta de garantias em meu país", expressou o dirigente sindical. Chamado retomado pela organização suíça Solifonds, que reúne uma dezena de sindicatos, associações de cooperação e solidariedade com os povos do Sul, o Partido Socialista Suíço etc. Solifonds convidou ao sindicalista sul-americano para participar em atividades públicas em Genebra e em Zurique.

"É essencial divulgar na Europa a realidade cotidiana das organizações sociais colombianas que sofrem uma enorme pressão em detrimento de seus direitos", enfatiza Yvonne Zimmermann, uma das responsáveis por Solifonds.

Duas violências superpostas

Apesar do discurso mais político do novo governo encabeçado pelo presidente Juan Manuel Santos e seu vice-presidente, o ex-sindicalista Angelino Garzón, "padecemos uma realidade cotidiana cada vez mais complicada para exercer nossos direitos sindicais", afirma Álvaro Veja.

Veja, engenheiro mecânico, é o presidente da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia (CUT), na seccional do Valle del Cauca –com 38 mil afiliados–, uma das regiões mais importantes do país e mais atingidas pela ação dos distintos atores armados.

Um primeiro tipo de violência, explica Veja, é o resultado de uma "política global antissocial imposta por muitas multinacionais instaladas no país. Desconhecem sistematicamente o direito à sindicalização; fecham empresas nacionais para desarticular associações gremiais e baixar custos; promovem a criminalização do protesto social".

A segunda manifestação, "é a violência social cotidiana em crescimento, produto do aprofundamento da crise econômica e do impacto das políticas oficiais contra os setores economicamente mais frágeis do país, entre eles os trabalhadores", explica.

Sobre sua própria experiência diz: "era trabalhador da multinacional de capital brasileiro Gerdau. Fui atingido pelo fechamento arbitrário e posterior liquidação de sua filial Sidelpa, em 2009". No processo contra o fechamento do centro produtivo, inicialmente participaram 256 trabalhadores. Porém, devido a pressões da multinacional e do Estado, "finalmente, estávamos na luta somente dois, que éramos dirigentes sindicais na empresa".

Após complicados processos jurídicos e mediações internacionais, os dois delegados sindicais conseguiram obter uma pensão antecipada. "Porém, o mais importante é que a empresa teve que pagar uma indenização reparatória aos sindicatos que defenderam a causa. Foi uma forma de reconhecer sua arbitrariedade e constituiu uma vitória simbólica, mesmo que limitada, dos direitos trabalhistas", explica. >>>>

Colômbia: As multinacionais atentam contra os direitos (cont.)

Realidade deteriorada

Mais de 50 dirigentes sindicais foram assassinados em 2011 em toda a Colômbia. Quatro deles na região do Valle del Cauca.

Nos últimos meses, "dispararam os índices de ameaças contra ativistas e dirigentes sindicais em minha região", explica Veja, que foi vítima de uma intimidação à sua residência no dia 25 de novembro de 2011 e de pressões crescentes nos últimos três meses.

Trata-se de criminalizar ao movimento sindical, às organizações sociais em geral. Por isso, apesar do discurso oficial do respeito aos direitos humanos, a realidade cotidiana contradiz tal argumento", enfatiza.

Para responder a tantas pressões, "tentamos articular alianças e apoio mútuo entre os sindicatos, organizações sociais, como a Minga (Mutirão) Indígena, o setor da cultura; o movimento estudantil, que tem se mobilizado fortemente no segundo semestre do ano passado; e algumas comunidades desalojadas de zonas periféricas".

Solidariedade com as mulheres sindicalistas

Minoritárias nas instâncias de direção dos sindicatos colombianos, as mulheres exigem maiores quotas de participação.

Solifonds apoiou um projeto de seminários de formação para as sindicalistas da CUT Valle del Cauca. Apesar de que, originalmente, previa-se uma centena de inscritas, "finalmente, participaram 130 mulheres de doze sindicatos setoriais", explica Yvonne Zimmermann, da organização solidária suíça, que ratifica a necessidade de reforçar o apoio aos sindicatos e organizações sociais do país sul-americano, "para assegurar um exercício real dos direitos sindicais", à base de todo direito humano essencial. [*Sergio Ferrari, em colaboração com E-CHANGER e swissinfo]. (ADITAL < 24.02.2012)

El sector extractivo es hoy el centro de muchas discusiones

Por Carlos Bustos Patiño, Coordinador de la ICEM-Colombia

El Jueves 9 de febrero el equipo coordinador de la ICEM, estuvo en el lanzamiento del libro El sector extractivo en Colombia 2005-2010, publicado por "Foro Nacional por Colombia". Documento de importancia para el debate de reforma que acaba de aprobar el gobierno Nacional, que cambia la distribución de las regalías y las rentas minero energéticas en el marco de la locomotora económica que impulsa el gobierno Santos.

Los puntos que se trataron son de vital importancia para el movimiento sindical, ya que abren un panorama en el que la movilización política mancomunada del sector será indispensable para influir en partes indispensables de la reforma, como el porcentaje de regalías de las empresas y los criterios de asignación de los recursos.

Al evento concurren panelistas internacionales que analizaron el tema de la distribución y el uso de la renta, de la explotación y las regalías en los países de Latinoamérica. Para darle paso a la exposición del informe de las industrias extractivistas en Colombia hecha por Fabio Velázquez Carrillo de Foro Nacional por Colombia. Los expositores ofrecieron una útil comparación entre países, de sus marcos legales, políticas públicas, sistemas de contratación, de tributación y políticas presupuestarias sobre el sector extractivo; que suma mayores herramientas al debate en torno al caso nacional e ilustra de manera técnica las bajas utilidades que las empresas multinacionales dejan al Estado colombiano.

El panel compuesto por Carlos Monge (coordinador del tema del extractivismo en Perú de Reneue Watch Institute), Javier Aspuri (coordinador de la Red Latinoamericana de industrias extractivas) y Diego Otero Prada (Corciencia y ex Viceministro de Minas y Energía en 1994) deja claro que los estados de la región tienden a hacer alianzas con las multinacionales en busca de mayor rentabilidad, con tasas de tributación y de participación cada vez más grandes. Al ser una importante fuente de ingresos que desde el 2002 mejoró con el incremento de los precios del petróleo, los estados Latinoamericanos aumentaron sus contratos y sistemas de tributación. Cada país ha asumido políticas y legislaciones sobre el uso y distribución de la renta extractiva que difiere el uno del otro, pero con el común denominador de aumento en sus tasas de rentabilidad y reformas discrecionales que cambian prácticamente cada año. >>>

El sector extractivo es hoy el centro de muchas... (cont.)

En el caso Colombiano, el sistema de rentas y de regalías ha ido aumentando pero muy modestamente por la razón que arguye la oficialidad de no dejar ir la inversión extranjera; situación que ubica a Colombia como uno de los países que menos renta percibe de toda la región con un sistema de regalías que está en promedio por el 8% y con una renta que llega a un 40%.

Como mencionó Diego Otero Prada, estas ganancias han sido importantes en la participación del PIB del país, pero nunca han estado enmarcadas por una política industrial sólida y de largo plazo que permita a Colombia destinar esos valiosos recursos para el fortalecimiento de su industria interna con bienes de valor agregado. Las intenciones del gobierno y de los técnicos tecnócratas que se han sentado en los ministerios para favorecer a las empresas que posteriormente les dan un alto cargo directivo, no han permitido pensar una política industrial que busque desarrollar por ejemplo el sector petroquímico en el país, la refinación u otras actividades que le agreguen valor a nuestras materias primas.

A esto hay que sumar el problema de impacto, que en las zonas de explotación es muy agudo. El reporte que hizo Javier Azpur (Coordinador de la Red Latinoamericana de industrias extractivas) de la investigación sobre los efectos que tienen las actividades de explotación sobre las poblaciones cercanas en Perú, permite identificar un problema de la misma naturaleza en Colombia:

- 1) La población de naturaleza campesina y colona, no se engancha como proveedor de bienes y servicios de esa actividad extractiva
- 2) La renta minera se convierte en un gasto público, ya que las regiones se ven obligadas a gastar. Esto implica una distorsión del mercado laboral.
- 3) La bonanza y la presencia de la mina elevan la inflación. Por lo que el pequeño productor pierde capacidad económica cuando va a consumir bienes y servicios en lo urbano.

A estos males se suma la precariedad del empleo demandado por la empresa explotadora, de tipo temporal e inconstante, que se comporta en función de los periodos de bonanza o disminución extractiva. Sin mencionar, los impactos ambientales. Los hallazgos negativos encontrados sobre las condiciones de vida en presencia del extractivismo son desafortunadamente más numerosos que en los casos donde se pueda decir que se registra una relación positiva entre la explotación minera y el bienestar de las comunidades. Como plantea Azpur, no existe hasta ahora una investigación que mire de manera estructural lo que ha significado la explotación minera en términos de bienestar, sólo se tiene la de Javier Arellano, quien demuestra la inexistencia de mejora en indicadores sociales, gastos sociales y necesidades básicas insatisfechas en las zonas de producción minera.

Desde la presentación del informe de la extracción minera en Colombia, Carrillo demuestra el aumento de las anteriores preocupaciones cuando se piensa en las consecuencias de la nueva reforma que propuso el gobierno para redistribuir la renta extractiva. Medida que soluciona en parte el equilibrio y equidad territorial, pero que deja a muchos departamentos y municipios con menos del 50% de sus recursos, como en el caso de Arauca, que tendrán dificultades para "pagos de obligaciones contraídas con vigencias futuras (1)". La recentralización de la reforma, plantea que el sistema nacional de regalías será presupuestado bianualmente por el congreso de la república frente a lo que Carrillo y su grupo de investigación sienten desconfianza por la corrupción que se puede presentar en el manejo de estos recursos por parte de un estamento con amplios antecedentes de corrupción en el gobierno pasado. La centralización de las decisiones sobre el uso y la distribución de la renta siguen manteniendo su naturaleza discrecional cuando se mira el poco alcance que tendrá el supuesto incremento de recursos en la disminución de la brecha entre regiones y el combate a la pobreza, sobre todo, porque no se toca el porcentaje de regalías que deben dar las empresas. Tampoco es alentadora la participación que tendrá el nuevo fondo destinado para educación y tecnología, el cual sólo aumentará su participación en el PIB de 0,16% a 1%.

En la reforma aún hay muchos puntos en discusión, y son los más prioritarios y sustanciales que quedan por definir en la reglamentación del acto legislativo: criterios para asignar los fondos de compensación, los fondos de desarrollo regional y los porcentajes que deben pagar las empresas mineras y petroleras. La Iniciativa de reforma dirige la discusión hacia el giro de un Estado ya descentralizado a uno, otra vez, centralizado que debe ser puesto en la mira de los movimientos sociales y políticos del país.

La ICEM ha convocado para los días 15 y 16 de febrero, en Barranquilla, el seminario minero energético en el que se analizará entre otros temas los efectos de la explotación minero energética en Colombia, consideramos estos insumos como importantes para las discusiones futuras, frente a una de las locomotoras económicas del actual gobierno.

Mexico: Homicidio industrial

Por Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del SNTMMSRM

El próximo 19 de febrero de 2012 se cumplen seis años de la tragedia que enlutó a 65 familias de trabajadores mineros, al ocurrir una terrible explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. Son seis años del homicidio industrial, como lo calificó entonces, que se cometió por parte de la empresa Grupo México y de su presidente Germán Larrea; su cuerpo directivo, encabezado por Xavier García de Quevedo, y su consejo de administración, al haber obligado a los trabajadores a laborar en condiciones totalmente inseguras e inhumanas, a pesar de todas las quejas, protestas y paros que el sindicato nacional de mineros, que honrosamente presido, interpuso para presionar a la mancuerna de Larrea y García de Quevedo a cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo (artículo 68); en la Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción 17), y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, fracción 14).

Se trata de seis años de impunidad, complicidad y protección hacia Larrea y Grupo México por parte de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ninguno de los tres –Larrea, Fox o Calderón– se presentó en la mina, ni para dar las condolencias a los familiares y mucho menos para ofrecer los apoyos técnicos, materiales y financieros que se requerían para el rescate de mineros, dejando desamparadas a las familias.

Adicionalmente, al quinto día de la explosión se apresuraron a cerrar y sellar la mina, impusieron al Ejército para terminar de un golpe la continuación de las tareas de rescate y se retiraron cobardemente del lugar, tanto el ingeniero químico y proveedor de Grupo México en sus empresas privadas de San Luis Potosí, Francisco Javier Salazar, improvisado por Fox como secretario del Trabajo, como los administradores de Grupo México dirigidos por el sumiso García de Quevedo.

Los dejaron a tan sólo 120 metros de profundidad, donde todavía se encuentran este día los cuerpos de 63 de ellos. Querían evitar que se conocieran las causas de la explosión y del derrumbe de la mina, las pésimas condiciones de inseguridad y la falta de salud e higiene que prevalecían, producto de la irresponsabilidad cómplice entre autoridades y empresarios generada por la corrupción compartida.

Para contrastar mejor esa miserable actitud de Larrea y de Grupo México, recordemos que en Chile en 2010, con un gobierno conservador como el actual de México, se logró el rescate de 33 mineros con vida atrapados en la explosión y el derrumbe del 5 de agosto de ese año en la mina San José de Atacama, cercana a San José de Copiapó, en la montaña, en terreno de roca dura, a más de 700 metros de profundidad, a diferencia del terreno suave y plano de Pasta de Conchos. Los mineros de allá fueron encontrados vivos al día 17 de iniciadas las tareas de rescate y nunca los abandonaron, como sí sucedió en Pasta de Conchos al quinto día de la tragedia, condenándolos a la muerte e iniciando de inmediato una persecución política con base en falsas acusaciones contra los dirigentes sindicales mexicanos. Grupo México, de Larrea, y el gobierno de Vicente Fox en complicidad, crearon una cortina de humo para desviar la atención sobre su grave negligencia criminal, pero el rescate en Chile los exhibió ante todo el mundo.

En el país andino, el rescate exitoso duró 69 días, actitud que no vimos en México. Para ilustrar todavía más la mezquindad de Larrea y socios, en Chile negociaron una compensación cercana a un millón de dólares para cada trabajador, mientras que en Pasta de Conchos les ofrecieron en forma indigna y humillante 75 mil pesos, cerca de 7 mil dólares, para cada una de las familias. En contraste, en la mina de carbón de Upper Big Ranch de West Virginia, Estados Unidos, que estalló en abril de 2010 y 29 mineros murieron, el presidente Barack Obama estuvo en varias ocasiones en el lugar del siniestro y se indemnizó a cada familia con 3 millones de dólares.

Germán Larrea al igual que sus socios y cómplices son como unos cuerpos sin alma, sin principios, sin sentido de culpa y mucho menos de responsabilidad personal, social, civil o penal sobre sus actos. La vida humana ajena para ellos no tiene ningún valor. A raíz de esa vergüenza nacional e internacional, las poderosas organizaciones sindicales mundiales acordaron realizar este año, del 19 al 25 de febrero, intensos Días de acción y lucha más enérgicos que los de 2011, para denunciar al gobierno de Felipe Calderón por inacción, por la represión y las violaciones a los Convenios Internacionales sobre el respeto al Derecho de Asociación, a la Autonomía y a la Libertad Sindical. Los argumentos son evidentes, la situación de los trabajadores en México se ha deteriorado, los sistemas abusivos de contratos de protección se han extendido, la intimidación física, legal y la tortura psicológica contra los trabajadores se ha reforzado, actuando en complicidad las corporaciones y el gobierno.

El mundo los está observando y los ha condenado. Los organismos sindicales internacionales están movilizándose con actos de protesta frente a embajadas y consulados de México y escribiéndole cartas a Felipe Calderón para que detenga esta agresión y respete los derechos laborales y humanos. De no ser así, las acciones se elevarán hasta que se detengan los abusos de poder, la corrupción y las constantes violaciones al estado de derecho. Esa clase de empresarios, el PAN y Calderón deben de inmediato corregir sus acciones contra el pueblo de México, antes de que se les termine el tiempo y la condena contra ellos se sostenga permanentemente, hasta llevarlos a juicio. (*La Jornada*, 16.02.2012)

Canadá: Trabajadores de Alcan protestan

El viernes pasado, 17 de febrero, los miembros del Local 9490 del Syndicat des Métallistes d'Alma del United Steelworkers (USW), llevaron su lucha contra Rio Tinto Alcan a la mayor ciudad de Québec, donde la Directora General de Alcan, Jacynth Côté, formaba parte de un foro supuestamente sobre los jóvenes con empleo, patrocinado por la Cámara de Comercio de la metrópolis de Montreal.

Unos 200 de los 780 trabajadores metalúrgicos de la fundición de aluminio Alma de Alcan en la región de Saguenay-lac-Saint-Jean, Québec, subieron a los autobuses que les llevaron los 460 kilómetros hasta Montreal para realizar una ruidosa protesta delante del local donde se efectuaba el almuerzo empresarial. Ésta es la primera manifestación que el sindicato realizaba fuera de la planta de fundición, que produce 488.000 toneladas de metal al año. Se unieron a ellos otros 100 trabajadores siderúrgicos de Montreal, y unos 100 estudiantes universitarios que se incorporaron a la manifestación del USW, una en protesta burlona sobre la temática "futuro de la juventud", donde los empresarios están de la mano con el gobierno liberal de la provincia de Québec en planes para aumentar las tasas de matrícula de la universidad.

Se había publicitado este tema en el "HotIssues@Lunch" supuestamente para "promover el éxito de la próxima generación de los quebequeses". El Syndicat des Métallistes d'Alma consideró profundamente irónica la participación de Jacynth Côté, ya que, en Alma, Alcan había recurrido a un cierre patronal para reemplazar empleos permanentes con remuneración de C\$36 la hora con trabajadores tercerizados y presumiblemente más jóvenes, con un salario de C\$16 la hora.

No se esperaba que en la ocasión del almuerzo Côté se dirigiera a los trabajadores víctimas del cierre patronal. Pero cuando se vio presionada por los periodistas que observaban el acto, calificó el conflicto como un "problema regional" que "será arreglado en Saguenay-lac-Saint-Jean" por los administradores en quienes, dijo, "confío plenamente."

A principios de la semana pasada, cuando el cierre patronal llevaba siete semanas y la remota región minera y de manufacturera comenzaba a sentir los efectos económicos de la pérdida de una base salarial, uno de los administradores locales de la empresa le dijo a Reuters que "en ese momento no podía señalar una fecha (para reiniciar las conversaciones) porque no se ha programado nada al respecto".

Como los precios del aluminio están muy bajos en este momento, el cierre patronal de Alma sirve como una estrategia que conviene a la empresa para restringir la oferta con el fin de elevar los precios. También se ajustaba muy bien a la estrategia de Rio Tinto de desinversión y devaluación de Alcan por C\$8,9 mil millones, en vista de su adquisición de la compañía canadiense en 2007, por US\$39 mil millones, aunque es probable que no se va a deshacer de la moderna planta de fundición de Alma, que cuenta con avanzada tecnología, y suministro hidroeléctrico de bajo costo. (...) (ICEM Brief, 22.02.2012)

Chile: Grupo ETEX: otra víctima fatal

La **Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera**, ICM lamenta el sensible fallecimiento del compañero Luis González Valenzuela, dirigente sindical del sector de materiales de la construcción en Chile. El compañero González Valenzuela, tesorero de su sindicato base y gran activista sindical se encontraba desempeñando su labor de "seleccionador" de los productos elaborados por la planta ladrillera, Industrias Princesa Ltda. parte del Grupo ETEX, que además está conformado por otras siete plantas en todo el país. Este holding, con sede en Santiago, es en la actualidad una de las 50 mayores empresas de Chile, y cuenta aproximadamente con 3.000 empleados.

Luis González Valenzuela, tenía 54 años de edad y le sobreviven 4 hijos, el menor de ellos de 11 años. Su cargo oficial era el de operador de maquinaria apiladora de ladrillos que alimenta los hornos de la planta. El accidente se produjo aproximadamente a las 13:00 horas del día de hoy jueves 23 de febrero cuando una máquina neumática le aprisionó su cuerpo. Sus compañeros se percataron del accidente minutos después pues operaba la maquinaria solo y en un espacio alejado.

Tenía 21 años de antigüedad en la empresa, ocho de los cuales se destacó como dirigente sindical. El Sindicato de Industrias Princesa Ltda. (ETEX) es parte de la Red ICM de Sindicatos de EMN de Materiales de Construcción, capítulo Chile y González Valenzuela fue uno de sus activistas más destacados.

La información suministrada por el Coordinador del Proyecto de la Red de Sindicatos de EMN de Materiales de Construcción, compañero Luis Salazar, destacó que el accidente fatal no es el primero en la planta ladrillera, hace cinco años en esta misma empresa, un trabajador tercerizado que realizaba labores de aseo también falleció producto de un accidente laboral.

Colômbia: As multinacionais na atentam contra os direitos

A criminalização dos movimentos sociais

Sindicalista colombiano pede solidariedade internacional ativa

O afã insaciável das multinacionais na Colômbia por adquirir empresas estatais, controlar territórios e explorar recursos naturais leva a uma crise crescente dos direitos trabalhistas e das garantias sindicais.



Na realidade colombiana atual, o apoio da comunidade internacional é essencial para "acompanhar e reforçar a vigência dos direitos humanos, trabalhistas e sindicais", enfatiza o dirigente sindical Álvaro Veja, durante sua recente estadia na Suíça.

Respeitar convênios da OIT

Veja, denunciou também as práticas das multinacionais que, priorizando seus interesses econômicos, desconhecem a legislação interna e convênios assinados pelo governo colombiano ante a Organização Internacional do Trabalho (OIT), como o 87 e o 98, referidos aos direitos de associação e negociação coletiva.

"Queremos que sejam conhecidas, em âmbito internacional, situações que requerem da solidariedade externa dada a falta de garantias em meu país", expressou o dirigente sindical. Chamado retomado pela organização suíça Solifonds, que reúne uma dezena de sindicatos, associações de cooperação e solidariedade com os povos do Sul, o Partido Socialista Suíço etc. Solifonds convidou ao sindicalista sul-americano para participar em atividades públicas em Genebra e em Zurique.

"É essencial divulgar na Europa a realidade cotidiana das organizações sociais colombianas que sofrem uma enorme pressão em detrimento de seus direitos", enfatiza Yvonne Zimmermann, uma das responsáveis por Solifonds.

Duas violências superpostas

Apesar do discurso mais político do novo governo encabeçado pelo presidente Juan Manuel Santos e seu vice-presidente, o ex-sindicalista Angelino Garzón, "padecemos uma realidade cotidiana cada vez mais complicada para exercer nossos direitos sindicais", afirma Álvaro Veja.

Veja, engenheiro mecânico, é o presidente da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia (CUT), na seccional do Valle del Cauca –com 38 mil afiliados–, uma das regiões mais importantes do país e mais atingidas pela ação dos distintos atores armados.

Um primeiro tipo de violência, explica Veja, é o resultado de uma "política global antissocial imposta por muitas multinacionais instaladas no país. Desconhecem sistematicamente o direito à sindicalização; fecham empresas nacionais para desarticular associações gremiais e baixar custos; promovem a criminalização do protesto social".

A segunda manifestação, "é a violência social cotidiana em crescimento, produto do aprofundamento da crise econômica e do impacto das políticas oficiais contra os setores economicamente mais frágeis do país, entre eles os trabalhadores", explica.

Sobre sua própria experiência diz: "era trabalhador da multinacional de capital brasileiro Gerdau. Fui atingido pelo fechamento arbitrário e posterior liquidação de sua filial Sidelpa, em 2009". No processo contra o fechamento do centro produtivo, inicialmente participaram 256 trabalhadores. Porém, devido a pressões da multinacional e do Estado, "finalmente, estávamos na luta somente dois, que éramos dirigentes sindicais na empresa".

Após complicados processos jurídicos e mediações internacionais, os dois delegados sindicais conseguiram obter uma pensão antecipada. "Porém, o mais importante é que a empresa teve que pagar uma indenização reparatória aos sindicatos que defenderam a causa. Foi uma forma de reconhecer sua arbitrariedade e constituiu uma vitória simbólica, mesmo que limitada, dos direitos trabalhistas", explica. >>>>

Colômbia: As multinacionais na atentam contra os direitos (cont.)

Realidade deteriorada

Mais de 50 dirigentes sindicais foram assassinados em 2011 em toda a Colômbia. Quatro deles na região do Valle del Cauca.

Nos últimos meses, "dispararam os índices de ameaças contra ativistas e dirigentes sindicais em minha região", explica Veja, que foi vítima de uma intimidação à sua residência no dia 25 de novembro de 2011 e de pressões crescentes nos últimos três meses.

Trata-se de criminalizar ao movimento sindical, às organizações sociais em geral. Por isso, apesar do discurso oficial do respeito aos direitos humanos, a realidade cotidiana contradiz tal argumento", enfatiza.

Para responder a tantas pressões, "tentamos articular alianças e apoio mútuo entre os sindicatos, organizações sociais, como a Minga (Mutirão) Indígena, o setor da cultura; o movimento estudantil, que tem se mobilizado fortemente no segundo semestre do ano passado; e algumas comunidades desalojadas de zonas periféricas".

Solidariedade com as mulheres sindicalistas

Minoritárias nas instâncias de direção dos sindicatos colombianos, as mulheres exigem maiores quotas de participação.

Solifonds apoiou um projeto de seminários de formação para as sindicalistas da CUT Valle del Cauca. Apesar de que, originalmente, previa-se uma centena de inscritas, "finalmente, participaram 130 mulheres de doze sindicatos setoriais", explica Yvonne Zimmermann, da organização solidária suíça, que ratifica a necessidade de reforçar o apoio aos sindicatos e organizações sociais do país sul-americano, "para assegurar um exercício real dos direitos sindicais", à base de todo direito humano essencial. [*Sergio Ferrari, em colaboração com E-CHANGER e swissinfo]. (ADITAL < 24.02.2012)

El sector extractivo es hoy el centro de muchas discusiones

Por Carlos Bustos Patiño, Coordinador de la ICEM-Colombia

El Jueves 9 de febrero el equipo coordinador de la ICEM, estuvo en el lanzamiento del libro El sector extractivo en Colombia 2005-2010, publicado por "Foro Nacional por Colombia". Documento de importancia para el debate de reforma que acaba de aprobar el gobierno Nacional, que cambia la distribución de las regalías y las rentas minero energéticas en el marco de la locomotora económica que impulsa el gobierno Santos.

Los puntos que se trataron son de vital importancia para el movimiento sindical, ya que abren un panorama en el que la movilización política mancomunada del sector será indispensable para influir en partes indispensables de la reforma, como el porcentaje de regalías de las empresas y los criterios de asignación de los recursos.

Al evento concurren panelistas internacionales que analizaron el tema de la distribución y el uso de la renta, de la explotación y las regalías en los países de Latinoamérica. Para darle paso a la exposición del informe de las industrias extractivistas en Colombia hecha por Fabio Velázquez Carrillo de Foro Nacional por Colombia. Los expositores ofrecieron una útil comparación entre países, de sus marcos legales, políticas públicas, sistemas de contratación, de tributación y políticas presupuestarias sobre el sector extractivo; que suma mayores herramientas al debate en torno al caso nacional e ilustra de manera técnica las bajas utilidades que las empresas multinacionales dejan al Estado colombiano.

El panel compuesto por Carlos Monge (coordinador del tema del extractivismo en Perú de Reneue Watch Institute), Javier Aspuri (coordinador de la Red Latinoamericana de industrias extractivas) y Diego Otero Prada (Corciencia y ex Viceministro de Minas y Energía en 1994) deja claro que los estados de la región tienden a hacer alianzas con las multinacionales en busca de mayor rentabilidad, con tasas de tributación y de participación cada vez más grandes. Al ser una importante fuente de ingresos que desde el 2002 mejoró con el incremento de los precios del petróleo, los estados Latinoamericanos aumentaron sus contratos y sistemas de tributación. Cada país ha asumido políticas y legislaciones sobre el uso y distribución de la renta extractiva que difiere el uno del otro, pero con el común denominador de aumento en sus tasas de rentabilidad y reformas discrecionales que cambian prácticamente cada año. >>>

El sector extractivo es hoy el centro de muchas (cont.)

En el caso Colombiano, el sistema de rentas y de regalías ha ido aumentando pero muy modestamente por la razón que arguye la oficialidad de no dejar ir la inversión extranjera; situación que ubica a Colombia como uno de los países que menos renta percibe de toda la región con un sistema de regalías que está en promedio por el 8% y con una renta que llega a un 40%.

Como mencionó Diego Otero Prada, estas ganancias han sido importantes en la participación del PIB del país, pero nunca han estado enmarcadas por una política industrial sólida y de largo plazo que permita a Colombia destinar esos valiosos recursos para el fortalecimiento de su industria interna con bienes de valor agregado. Las intenciones del gobierno y de los técnicos tecnócratas que se han sentado en los ministerios para favorecer a las empresas que posteriormente les dan un alto cargo directivo, no han permitido pensar una política industrial que busque desarrollar por ejemplo el sector petroquímico en el país, la refinación u otras actividades que le agreguen valor a nuestras materias primas.

A esto hay que sumar el problema de impacto, que en las zonas de explotación es muy agudo. El reporte que hizo Javier Azpur (Coordinador de la Red Latinoamericana de industrias extractivas) de la investigación sobre los efectos que tienen las actividades de explotación sobre las poblaciones cercanas en Perú, permite identificar un problema de la misma naturaleza en Colombia:

- 1) La población de naturaleza campesina y colona, no se engancha como proveedor de bienes y servicios de esa actividad extractiva
- 2) La renta minera se convierte en un gasto público, ya que las regiones se ven obligadas a gastar. Esto implica una distorsión del mercado laboral.
- 3) La bonanza y la presencia de la mina elevan la inflación. Por lo que el pequeño productor pierde capacidad económica cuando va a consumir bienes y servicios en lo urbano.

A estos males se suma la precariedad del empleo demandado por la empresa explotadora, de tipo temporal e inconstante, que se comporta en función de los periodos de bonanza o disminución extractiva. Sin mencionar, los impactos ambientales. Los hallazgos negativos encontrados sobre las condiciones de vida en presencia del extractivismo son desafortunadamente más numerosos que en los casos donde se pueda decir que se registra una relación positiva entre la explotación minera y el bienestar de las comunidades. Como plantea Azpur, no existe hasta ahora una investigación que mire de manera estructural lo que ha significado la explotación minera en términos de bienestar, sólo se tiene la de Javier Arellano, quien demuestra la inexistencia de mejora en indicadores sociales, gastos sociales y necesidades básicas insatisfechas en las zonas de producción minera.

Desde la presentación del informe de la extracción minera en Colombia, Carrillo demuestra el aumento de las anteriores preocupaciones cuando se piensa en las consecuencias de la nueva reforma que propuso el gobierno para redistribuir la renta extractiva. Medida que soluciona en parte el equilibrio y equidad territorial, pero que deja a muchos departamentos y municipios con menos del 50% de sus recursos, como en el caso de Arauca, que tendrán dificultades para "pagos de obligaciones contraídas con vigencias futuras (1)". La recentralización de la reforma, plantea que el sistema nacional de regalías será presupuestado bianualmente por el congreso de la república frente a lo que Carrillo y su grupo de investigación sienten desconfianza por la corrupción que se puede presentar en el manejo de estos recursos por parte de un estamento con amplios antecedentes de corrupción en el gobierno pasado. La centralización de las decisiones sobre el uso y la distribución de la renta siguen manteniendo su naturaleza discrecional cuando se mira el poco alcance que tendrá el supuesto incremento de recursos en la disminución de la brecha entre regiones y el combate a la pobreza, sobre todo, porque no se toca el porcentaje de regalías que deben dar las empresas. Tampoco es alentadora la participación que tendrá el nuevo fondo destinado para educación y tecnología, el cual sólo aumentará su participación en el PIB de 0,16% a 1%.

En la reforma aún hay muchos puntos en discusión, y son los más prioritarios y sustanciales que quedan por definir en la reglamentación del acto legislativo: criterios para asignar los fondos de compensación, los fondos de desarrollo regional y los porcentajes que deben pagar las empresas mineras y petroleras. La Iniciativa de reforma dirige la discusión hacia el giro de un Estado ya descentralizado a uno, otra vez, centralizado que debe ser puesto en la mira de los movimientos sociales y políticos del país.

La ICEM ha convocado para los días 15 y 16 de febrero, en Barranquilla, el seminario minero energético en el que se analizará entre otros temas los efectos de la explotación minero energética en Colombia, consideramos estos insumos como importantes para las discusiones futuras, frente a una de las locomotoras económicas del actual gobierno.

Argentina: La palabra de Victorio

El histórico dirigente metalúrgico y secretario del área de internacionales de la CTA, Victorio Paulón, reflexiona en una entrevista los avances producidos desde 2003 en adelante y dice que “confrontar con el poder electoral de Cristina es como enfrentar el liderazgo de Perón en tiempos de su exilio”.

Por Eduardo Blaustein para el diario Miradas al Sur

Histórico dirigente metalúrgico, Paulón comparte las demandas de Moyano y a la vez dice que “confrontar con el poder electoral de Cristina es como enfrentar el liderazgo de Perón en tiempos de su exilio”. Veterano de más de mil batallas, Victorio Paulón es, además de secretario internacional de la CTA liderada por Hugo Yasky, integrante destacado de la comisión directiva del Cels. Se curtió como militante gremial metalúrgico en el durísimo año 1975, en las coordinadoras de Villa Constitución.



Durante años fue secretario general de la UOM de esa localidad industrial, casi siempre –hasta el conflicto por la resolución 125– compartiendo espacio con otro sindicalista histórico: Alberto Piccinini. Enfrentado con la dirigencia nacional de su propio gremio, terminó encarcelado el 1° de mayo de 1975, durante la brutal represión a la huelga de 60 días que realizaron sus compañeros.

No fue una detención fugaz: estuvo preso seis años y medio “sin verle la cara a un juez” y luego debió exiliarse. Paulón tenía un hermano, Pedro, quien fue secuestrado el 19 de julio de 1976 y aún continúa desaparecido. La última vez que ambos hermanos pudieron verse las caras fue en agosto de 1975, cuando Pedro fue a visitar a Victorio en el penal de Coronda.

En esta entrevista, Paulón rescata los avances producidos desde 2003 en adelante, dice más que sugiere que la actual actitud de Hugo Moyano se parece en algo a la que adoptó Augusto Vandor en los '60 (“confrontar con el poder electoral de Cristina es como enfrentar el liderazgo de Perón en tiempos de su exilio”), pero no deja de repasar los reclamos que comparte con el dirigente camionero, ni la agenda nutrida de lo que falta para favorecer a los trabajadores. En todo caso, advierte contra los riesgos de un “verticalismo obsecuente” que “nos ponga de furgón de cola de políticas destinadas a destruir las conquistas históricas de los trabajadores, como sucedió en los '90”.

–El episodio ya prolongado de tensión entre el Gobierno y un sector importante de la CGT, ¿tiene sólo que ver con cierto apresuramiento o estilo de Moyano o también refleja dificultades para que se establezcan canales de diálogo y participación sindical más amplia y fluida?

–Lo entiendo como un proceso de crisis sin resolución, en el que prima el proyecto político sobre lo reivindicativo gremial. Es una característica de los gobiernos de este tipo: Lula en Brasil no reformó el modelo sindical, hay más centrales que antes y todas, aun las más acérrimas opositoras, hoy reivindicán al gobierno Lula-Dilma. Pepe Mújica recibe más críticas del PIT-CNT que Tabaré Vázquez. Evo tuvo en la COB mucho más un tenaz opositor que un aliado. Correa lo mismo y de Chávez se podría escribir más aún. Cuando aparecen gobiernos que toman banderas del movimiento sindical y las llevan adelante, generan este tipo de fenómenos.

–¿Qué comparte de la serie de reclamos que viene haciendo el sector de Moyano incluso antes del acto en Huracán?

–Los reclamos son inobjektos, se pueden discutir las prioridades. Para nosotros, por ejemplo, es más importante terminar con la tercerización y el trabajo en negro que lograr la participación en las ganancias. Esto no nos hace oponer a ese logro de los que trabajan en empresas que lo pueden pagar. Preferimos poner el énfasis en los pisos salariales que hacen que la mayoría de los asalariados tengan salarios bajos y una minoría, muy altos. Esto es materia de la negociación colectiva y para nuestra CTA es prioritario. Lo del impuesto a las ganancias es un reclamo justo siempre y cuando logremos un control efectivo sobre las horas extras y entremos en el debate sobre la reducción de la semana laboral, porque hay riesgo cierto de terminar fomentando una aristocracia obrera que es mala para el movimiento obrero. El impuesto a las ganancias actúa como desacelerador de la política empresaria de no ampliar planteles y ampliar la tercerización y la subcontratación. Es un mal remedio que hay que reemplazar por otros que limiten la vocación fragmentadora de las grandes patronales. Lo de las obras sociales que plantea Moyano es discutible en la medida en que se presente un proyecto que tienda a garantizar mejor la universalidad de la salud de los trabajadores, pero de ninguna manera para mercantilizarla más o convertir este derecho en una pelea por la caja. >>>>

Argentina: La palabra de Victorio (cont.)

–El deterioro de la relación entre el Gobierno y el moyanismo, ¿puede a su vez afectar la relación incipiente que se venía trabajando entre la CTA Yasky y ese sector de la CGT? ¿Moyano se vería obligado a alianzas con sectores en apariencia más “duros” como la CTA de Micheli y otros?

–La unidad de acción con el MTA se forjó en los duros años de la resistencia al neoliberalismo menemista y tiene ese valor. No es apenas el relato del “Hugo blanco y el Hugo negro”. Todos fuimos CGT única y buscamos por distintos caminos superar aquella espantosa traición histórica que devino del congreso del Teatro San Martín (N. de la R.: el 10 de octubre de 1989 comenzó en un congreso realizado en ese Teatro el proceso de fractura entre los sindicalistas que apoyarían al menemismo y los que confluían en la CTA y el MTA). Tanto la CTA como el MTA recorrimos caminos de resistencia y lucha y nos encontramos después del derrumbe con la misma búsqueda de reivindicar los derechos conculcados en aquella “segunda década infame”. No vemos riesgo de que el debate planteado entre la dirigencia de la CGT moyanista y el Gobierno nos lleve a tomar partido. Seguimos planteando los mismos reclamos que nos parieron reconociendo todos los logros de la era kirchnerista. Los ciclos de los logros del movimiento obrero nunca coinciden con los almanaques electorales, y en la actual coyuntura creemos necesario seguir recuperando derechos que hacen al conjunto de la clase. Nos sentimos a mitad de camino en la recuperación de todo lo que nos quitó la década del ‘90, compartida por gobiernos peronistas y radicales. Por eso somos autónomos pero no neutrales. Resistimos lo que nos daña como clase trabajadora y alentamos lo que nos permite avanzar en los derechos del conjunto.

–¿Qué tradición o proyecto sindical o político representa el llamado moyanismo si es que expresa tanto? ¿Qué peronismo es el moyanismo?

–Si repasamos la historia del movimiento sindical desde el ‘55 en adelante, Hugo Moyano nos recuerda mucho a Augusto Timoteo Vandor. No sólo en la forma de la lucha reivindicativa, sino también en el planteo de un partido laborista. Respetando la distancia histórica y el origen de uno y otro, metalúrgico aquél y camionero éste, me parece que confrontar con el poder electoral de Cristina es como enfrentar el liderazgo de Perón en tiempos de su exilio. Obviamente que después de 28 años de democracia estas contradicciones tienden a desarrollarse de forma totalmente diferente que en aquella dictadura de 18 años con breves gobiernos electos y derribados.

–Usted y Hugo Moyano participaron juntos de más de un acto y movilización. ¿Qué comparten y en qué se siguen diferenciando?

–La unidad de acción no es una táctica, es una definición estratégica en aquellas cuestiones que afectan los intereses fundamentales del conjunto de la clase trabajadora. Seguimos dispuestos a luchar juntos, y seguimos marcando nuestra concepción de cambiar el modelo sindical argentino para que nunca más el verticalismo obsecuente nos ponga de furgón de cola de políticas destinadas a destruir las conquistas históricas de los trabajadores como sucedió en los ‘90. Con esa misma convicción, afirmo que nuestra CTA no será nunca vehículo de estrategias de nuestros enemigos, como la Sociedad Rural, los intereses financieros y los grandes empresarios que crecen dándole la espalda al país.

–Ya pasan ocho años de gobiernos kirchneristas. ¿Por qué cree que cuesta tanto el reconocimiento de la personería de la CTA, más allá de que ahora la central se haya partido?

–Pienso que es una decisión política que nunca tuvieron Néstor Kirchner ni Cristina. La personería es una deuda más allá de la situación interna de la CTA. No hubiese evitado la fractura ni la hubiese agravado. El unicato sindical fue abandonado en el mundo entero salvo en algunos países del otrora llamado socialismo real. Seguimos pensando que estamos más en línea con lo que es el sindicalismo que viene que la vieja CGT. Toda crisis genera oportunidades de cambio, hoy estamos todos en esa situación y estoy seguro de que habrá nuevas síntesis.

–El hecho de que hoy el secretario general de la CGT provenga del sector de los servicios, ¿dice algo sobre el estado del sindicalismo, la política o la economía nacional? ¿Sería distinto o mejor que en la CGT o la CTA el secretario general provenga de un gremio industrial?

–Esa constatación habla claramente de lo que pasó en los ‘90. La UOM del año ‘75 tenía más de 550.000 afiliados, la de 2001 apenas 65.000, hoy debe rondar los 300.000. La mitad de lo que fue y cinco veces lo que dejaron las políticas neoliberales. La mayoría de los gremios industriales verifican porcentajes parecidos. De todos modos los liderazgos no son necesariamente corporativos. Saúl Ubaldini, el último dirigente de la central unificada, venía de un sindicato desconocido y había logrado su liderazgo en la resistencia a la dictadura militar. En esto lo que prioriza la elección es la estrategia y la política. Desde nuestra central aspiramos a una conducción de la CGT que mantenga aquel lineamiento que nos permitió resistir el neoliberalismo y acompañar las políticas del Gobierno Nacional y popular. Sería muy negativa una nueva hegemonía de “los gordos”.

'Carne, Osso': O trabalho nos frigoríficos brasileiros

Documentário alia imagens impactantes a depoimentos que caracterizam o duro cotidiano do trabalho nos frigoríficos brasileiros de abate de aves, bovinos e suínos

Quem trabalha em um frigorífico se depara diariamente com uma série de riscos que a maior parte das pessoas sequer imagina. Exposição constante a facas, serras e outros instrumentos cortantes; realização de movimentos repetitivos que podem gerar graves lesões e doenças; pressão psicológica para dar conta do alucinado ritmo de produção; jornadas exaustivas até mesmo aos sábados; ambiente asfixiante e, obviamente, frio – muito frio.



Esse é o duro cotidiano de trabalho nos frigoríficos brasileiros de abate de aves, bovinos e suínos que o documentário Carne, Osso traz à tona. Ao longo de dois anos, a equipe da ONG Repórter Brasil percorreu diversos pontos nas regiões Sul e Centro-Oeste à procura de histórias de vida que pudessem ilustrar esses problemas.

O filme alia imagens impactantes a depoimentos que caracterizam uma triste realidade que deve ser encarada com a devida seriedade pela iniciativa privada, pela sociedade civil e pelo poder público.

Danos físicos e psicológicos

"Cerca de 80% do público atendido aqui na região é de frigoríficos. Ainda é um pouco difícil porque o círculo vicioso já foi criado. O trabalhador adoece e vem pro INSS [Instituto Nacional de Seguro Social]. Ele não consegue retornar, ele fica aqui. E as empresas vão contratando outras pessoas. Então já se criou um círculo que agora para desfazer não é tão rápido e fácil" (Juliana Varandas, terapeuta ocupacional do INSS de Chapecó - SC).

As estatísticas impressionam. De acordo com o Ministério da Previdência Social, um funcionário de um frigorífico de bovinos tem três vezes mais chances de sofrer um traumatismo de cabeça ou de abdômen do que o empregado de qualquer outro segmento econômico. Já o risco de uma pessoa de uma linha de desossa de frango desenvolver uma tendinite, por exemplo, é 743% superior ao de qualquer outro trabalhador. E os problemas não são apenas físicos. O índice de depressão entre os funcionários de frigoríficos de aves é três vezes maior que o da média da população economicamente ativa do Brasil.

Ritmo frenético

"A gente começou desossando três coxas e meia. Depois, nos 11 anos que eu fique lá, cada vez eles exigiam mais. Quando saí, eu já desossava sete coxas por minuto". (Valdirene Gonçalves da Silva, ex-funcionária de frigorífico).

Em alguns frigoríficos de aves, chegam a passar mais de 3 mil frangos por hora pela "nória" – a esteira em que circulam os animais. Há trabalhadores que fazem até 18 movimentos com uma faca para desossar uma peça de coxa e sobrecoxa, em apenas 15 segundos. Isso representa uma carga de esforço três vezes superior ao limite estipulado pelos especialistas em saúde do trabalho.

O Brasil é simplesmente o maior exportador de proteína animal do mundo. O chamado "Complexo Carnes" ocupa o terceiro lugar no pódio do agronegócio nacional, atrás apenas da soja e do açúcar/etanol. Em 2010, as vendas externas superaram US\$ 13 bilhões. No total, o setor emprega diretamente 750 mil pessoas. Vale lembrar que muitos desses frigoríficos se transformaram em gigantes no mercado mundial com dinheiro do governo via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – o principal banco de fomento da economia brasileira.

Melhorar é possível

"Basicamente, é conscientizar essas empresas para reprojeter essas tarefas. Introduzir pausas, para que exista uma recomposição dos tecidos dos membros superiores, da coluna. Em algumas vai ter que ter diminuição de ritmo de produção. Nós estamos hoje chegando só no diagnóstico do setor. Mas as empresas ainda refratárias a esse diagnóstico". (Paulo Cervo, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE)

Não é difícil diminuir a incidência de problemas no ambiente de trabalho de um frigorífico. Reduzir a jornada de trabalho; adotar um rodízio de tarefas; diminuir o ritmo da linha de produção e realizar pausas mais frequentes e mais longas são algumas medidas possíveis. Falta apenas que as empresas se conscientizem disso. (*Repórter Brasil, 23.02.2012*)

Minería mexicana, tan oscura como el carbón

A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.

En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.

Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.

Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.

“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la verdad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.

“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo, por este tema.

A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.

La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.

Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.

Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.

La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del Gobierno Federal en el tema.

La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el Gobierno Federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.

En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747). >>>

Minería mexicana, tan oscura como el carbón (cont.)

Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La estadística por sí misma desmiente al Gobierno Federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.

La noche del pasado miércoles 8 de febrero una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas–El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.

Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.

El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: “No pos andaban trabajando con otro chavo”, dijo.

Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.

De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para “preservar el orden”. Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.

Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así:

“Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente”.

Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.

El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.

En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.

De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.

El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.

“No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria”, espeta García Cervantes al gobierno federal. (...) *(Arturo Rodríguez García) (Proceso, 18.02.2012)*

Rio +20: Impacto dos agrotóxicos na saúde das pessoas

Rio+20: Dossiê mostrará impacto dos agrotóxicos na saúde das pessoas e dos ecossistemas

Natasha Pitts, Jornalista da Adital

Buscando conhecer o impacto dos agrotóxicos na saúde dos/as brasileiros/as, o Grupo de Trabalho (GT) de Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), em parceria com outros GTs, comissões e associados decidiu pesquisar o tema e publicar suas descobertas em um dossiê. O documento será lançado no Congresso Mundial de Nutrição, em abril deste ano, e durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que acontecerá em junho no Rio de Janeiro.



RIO+20
Conferência das
Nações Unidas
sobre
Desenvolvimento
Sustentável

A realização do dossiê tem como objetivo principal sensibilizar autoridades públicas nacionais e internacionais para criar e executar políticas que possam proteger e promover a saúde das pessoas e dos ecossistemas afetados de forma negativa pelos agrotóxicos.

De acordo com o professor Fernando Ferreira Carneiro, chefe do Departamento de Saúde Coletiva da UnB, dois aspectos foram levados em consideração quando se pensou em laborar o dossiê.

"O primeiro aspecto diz respeito ao fato de que há três anos o Brasil ocupa o primeiro lugar no consumo de agrotóxicos em virtude do modelo de agronegócio e da produção de transgênicos e não está acontecendo uma avaliação dos impactos desses agrotóxicos na saúde da população. O segundo aspecto é que se espera do Estado e da Academia mais atenção para regular o uso. Existe um lobby para se permitir e flexibilizar a utilização de agrotóxicos. Precisamos visibilizar o problema".

Para compor o dossiê, o GT de Saúde e Ambiente está recebendo a colaboração de pesquisadores de todo o Brasil. Mestres e doutores estão colaborando com o envio de seus trabalhos. O sistema de saúde de algumas cidades também está ajudando e enviando dados. Todo o material recebido será sistematizado por uma comissão.

O chefe do Departamento de Saúde Coletiva da UnB defende que a elaboração do dossiê representa uma oportunidade para repensar o modelo de desenvolvimento do Brasil.

"Será que este modelo está gerando bem-estar para a população? Ou está retirando agricultores de suas terras e dando espaço para grandes plantações de transgênicos? A verdade é que outro modelo de desenvolvimento é possível e necessário. A agroecologia é o caminho do futuro e pode gerar um novo modo de vida. O desafio do Brasil é deixar de ser o maior consumidor de agrotóxicos e se tornar o maior produtor de alimentos saudáveis. Há alternativas para alimentar o mundo sem agrotóxicos", defende Fernando.

Agrotóxicos em dados

Hoje, o Brasil é o principal consumidor de agrotóxicos do mundo, tendo ultrapassado os Estados Unidos em 2008. Apesar dos avanços tecnológicos alcançados nos últimos dez anos, o país não conseguiu reduzir o uso deste produto em suas lavouras. Pelo contrário, Brasil utiliza a cada dia mais venenos em virtude da crescente produção de alimentos transgênicos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para cada caso de intoxicação por agrotóxico registrado, 50 outros acontecem, mas não são catalogados. A OMS também revela que cerca de 200 mil pessoas morrem anualmente pela ingestão de agrotóxicos e outras três milhões sofrem intoxicações agudas. (ADITAL, 28.02.2012)

Peru: asesinado el dirigente del Sindicato

Construcción Civil demanda a las autoridades la captura de los asesinos del dirigente sindical, Armando Viera

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Peru (FTCCP)

En momentos que se dirigía realizar sus labores sindicales cotidianas, fue asesinado el dirigente del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil del Callao, Armando Viera, quien ocupaba la responsabilidad de secretario de organización. Este hecho que enluta a los obreros formales de los andamios demuestra que las organizaciones criminales habrían iniciado una persecución contra los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) y sus bases.

Cabe mencionar, que la FTCCP junto a la CGTP han denunciado reiteradamente la responsabilidad del anterior gobierno sobre la violencia en las obras y el incremento de la inseguridad ciudadana, por la protección política y legal que brindaban a los seudo sindicatos y bandas de delincuentes.

A pesar de los anuncios del actual mandatario de enfrentar la violencia y la inseguridad ciudadana, el asesinato de Armando Viera comprueba que dicha política no ha logrado los resultados ofrecidos y todos los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos en peligro y a merced de la delincuencia.

La FTCCP expresa sus condolencias a los familiares del dirigente Viera y demanda a las autoridades el esclarecimiento del crimen y la captura de los responsables. *(Rebanadas de Realidad , 10.02.2012)*

Shougang no respeta leyes laborales en el Perú

"Si minera estatal china Shougang no respeta leyes laborales en el Perú, entonces debe irse de nuestro país"

Declaró Luis Castillo Carlos, Secretario General de la FNTMMSP.

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Luis Castillo Carlos, declaró al programa "Democracia Informativa" de Marcona, "que ante abusos reiterados y maltratos a los trabajadores sindicalizados de Shougang y la población de ese distrito durante casi 20 años, la empresa estatal china Shougang debe abandonar los yacimientos de hierro al generar de manera reiterada un clima de inestabilidad social y laboral que impide el desarrollo local y por ende de la nación".

Acusó además a sus funcionarios de ser los responsables de la debacle y el caos laboral en esa empresa propiedad del Estado chino que atenta contra derechos constitucionales de los ciudadanos peruanos que laboral y habitan en Marcona.

Estas declaraciones las hizo en medio de la huelga general indefinida reiniciada por el Sindicato de Empleados de Shougang el 6 de febrero último en defensa de su Negociación Colectiva 2010-2011, suspendida el año pasado, y que la Segunda Sala Civil de Justicia de Ica ha declarado legal haciendo prevalecer el derecho constitucional a la huelga de trabajadores.

Debe tenerse en cuenta que los dos sindicatos de Shougang, Obreros y Empleados, se encuentran defendiendo sus negociaciones colectivas por medio de Arbitraje Potestativo señalado por el Ministerio de Trabajo en Lima conforme al mandato del DS 014-2011-TR emitido el 17 de setiembre del año 2011 por el gobierno central.

Finalmente, la FNTMMSP se reafirma en lo señalado respecto a que la empresa estatal china Shougang, representa un riesgo para el mantenimiento de la paz social y laboral no sólo en Marcona, sino en el país, en medio de una coyuntura de crisis económica internacional. *(Rebanadas de Realidad , 10.02.2012)*

Argentina: Jornada de Lucha Contra la Megaminería

Cobertura Jornada Nacional de Lucha Contra la Megaminería y por la Derogación de la Ley Antiterrorista

Más de 5.000 personas se concentraron en Plaza de Mayo en el primer rechazo masivo a la ley antiterrorista y en denuncia de la represión de los pueblos de Catamarca, La Rioja y de los Valles Calchaquíes. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) convocó a la marcha que encabezó a través de las arterias céntricas de Avenida de Mayo y Diagonal Sur y que culminó en un acto frente a la Casa de Gobierno. Minutos antes la columna se detuvo frente a la Secretaría de Minería de la Nación, circunstancia aprovechada por Lucía Ávila de las asambleas riojanas, quien fustigó duramente al gobierno nacional, a los provinciales y a las corporaciones transnacionales, en conmovedora arenga.

Las consignas principales fueron dictadas por los assembleístas que componen la UAC y mediante un sorteo democrático marcharon ordenadamente con sus banderas las agrupaciones, movimientos sociales y partidos políticos.

Los oradores fueron únicamente los compañeros de las asambleas que enfrentan en estos momentos a las fuerzas especiales represivas en el norte del país. Durante el transcurso del acto se hizo mención a más de doscientas asambleas que nutren la UAC a lo largo y ancho del territorio nacional, poblaciones que defienden leyes contra la megaminería metalífera a cielo abierto con compuestos tóxicos, las que intentan impedir explotaciones vigentes y las que decididamente se movilizan frenando exploraciones o prospecciones de yacimientos. "El Famatina no se toca" fue la entonación masiva que cambiaba de localidad para cada una de las comunidades que sufren el impacto de una minería que contamina, destruye territorios y saquea los bienes comunes. El concepto de que "tocan a uno, tocan a todos" es una muestra terminante del juramento que se autoimpuso el colectivo assembleísta más grande del país, que crece de manera horizontal, sin dirigencia alguna pero con el claro compromiso de impedir este sistema extractivo, expulsando a monopólicas corporaciones que usufructúan las leyes permisivas de los noventa y que desplaza poblaciones, enajenando territorios a los que despoja de minerales críticos y estratégicos con un sistema extractivo perverso.

Delegados de Andalgalá, Chilecito, Tinogasta y Belén, representantes de pueblos originarios y militantes de las asambleas de las capitales de La Rioja y Catamarca, reiteraron los ejes de estas luchas: defender el agua y la tierra y por extensión a todos los bienes comunes involucrados en el ecosistema territorial que hoy intentan ocupar y vaciar las corporaciones transnacionales en connivencia con gobiernos que traicionan la voluntad popular. Los discursos fueron desgarradores y emotivos documentos que salían de lo más profundo de pueblos que soportan persecuciones en tanto pretenden expresarse mediante consultas populares, agitando banderas de libertad y de dignidad social. Los oradores le transmitieron a la numerosa concurrencia de Plaza de Mayo la férrea voluntad de una lucha que no tendrá claudicaciones.

Por estas razones, la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, hace responsable a un Poder Ejecutivo maquillado de nacional y popular, aunque en realidad practica un despiadado silencio ante grupos especiales de choque al servicio de políticas neoliberales represivas en manos de corruptos gobernantes de provincias. La UAC exige la derogación inmediata de la ley antiterrorista por ser un instrumento de militarización de territorios y judicialización de la protesta social.

Las poblaciones afectadas no negocian, exigen el retiro inmediato de todo tipo de minería hidroquímica metalífera a cielo abierto, la derogación de las leyes mineras y un debate público y nacional al respecto. La UAC impulsa una democracia participativa donde las voces de todos y de cada uno de los involucrados sea debidamente escuchada.

UAC, Buenos Aires, 23 de febrero de 2012

[Clickear Documento Conjunto Jornada nacional de lucha. Contra la MegaMinería y por la Derogación de la Ley AntiTerrorista](#)

[-Clickear Carta abierta de la UAC. Respuesta de las Asambleas en lucha contra la MegaMinería a la Señora Presidenta de la Nación](#)

Energia, Recursos Minerais e Desenvolvimento

Ildo Luís Sauer / Nilton B. Amado / Sonia Seger Mercedes

Ildo é engenheiro gaúcho. Nilton e Sonia são pós-doutorandos em Energia pela Universidade de São Paulo

Introdução

Os debates envolvendo a apropriação social da energia e seu papel no modo de produção atual compõem de duas dimensões distintas, ainda que permanentemente interligadas:

- (i) a disputa pelos excedentes decorrentes da propriedade dos recursos naturais de alta qualidade;
- (ii) o papel dos recursos naturais no mecanismo causal de aumentos de produtividade desencadeado pela Revolução Industrial.

Ambas são imprescindíveis para entender a maneira como o conflito de classes tem se manifestado no momento histórico atual, desde as crises do petróleo na década de 1970 e o fim da chamada era de ouro do capitalismo. Dada a amplitude do problema e seus inúmeros desdobramentos, neste texto se buscara fundamentalmente apresentar fatos e questionamentos que permitam evidenciar as relações sociais de produção que garantem a sociedade o controle sobre os fluxos de energia e materiais dos quais depende, de modo a mostrar o processo subjacente a este controle sobre o mundo natural como um fio condutor organizador da reprodução da civilização burguesa ao longo do tempo.

Para efetuar tal discussão, será adotada a perspectiva da contextualização histórica da apropriação social da energia e dos materiais no mundo e no Brasil e da análise da forma pela qual esta apropriação se vincula ao processo social de acumulação e reprodução do capital. Será enfocada a disputa pelos excedentes econômicos provenientes da propriedade dos recursos energéticos e minerais e, também, problematizado o que tem sido chamado de 'desenvolvimento sustentável', explicitando o conflito de classes implícito e aparentemente intransponível (nos termos do modo de produção capitalista) que se articula a partir dos atuais dilemas ambientais. Por fim, tendo em vista o cenário atual e o papel que os recursos naturais tem tido na reprodução socioeconômica, serão apresentadas propostas e conclusões.

A análise e as propostas deste texto devem ser vistas no contexto das perspectivas analíticas hegemônicas nas recentes décadas no Brasil para o debate do processo de desenvolvimento. Como contribuição e resgate destas perspectivas, aqui são recuperadas três concepções: a da teoria do desenvolvimento dependente ou associado; a abordagem dos neomarxistas, que rejeitavam a possibilidade de uma aliança de classes que levasse a um desenvolvimento capitalista autônomo na periferia do capitalismo, e que defendiam a busca pela revolução socialista; e a escola estruturalista, formulada pela CEPAL e abraçada pelo ISEB. De certa forma simplificada, estas três perspectivas aparecem, implícita ou explicitamente, nas propostas e nas práticas implementadas no Brasil em relação às estruturas de produção e apropriação da energia e dos recursos minerais e naturais em geral.

A concepção da teoria da dependência, associada no Brasil ao trabalho de Enzo Faletto e Fernando Henrique Cardoso, tem origem na análise do marxista alemão Gunder Frank, criticando a teoria da revolução capitalista, que propunha a aliança da esquerda com a burguesia, pois afirmava a inexistência da burguesia nacional no Brasil ou na América Latina. Paradoxalmente, a partir da crítica de Gunder Frank, Faletto e Cardoso entendiam que a solução para a inexistência de uma burguesia nacional, capaz de ancorar o desenvolvimento em bases capitalistas, estaria na dependência associada: a associação ao capital estrangeiro, com a poupança externa, instrumentalizada pelas multinacionais, cumpriria este papel.

Na verdade, tratava-se de uma justificativa elegante para a subordinação ao Império, e, por isso mesmo, foi saudada pela intelectualidade norte-americana como uma saída da esquerda democrática para lutar pela justiça social. Esta percepção permite compreender o terreno fértil encontrado pela onda neoliberal dos anos 90, dos governos Collor a FHC, para as ações concretas: privatizações das telecomunicações, da energia elétrica, da siderurgia e da Vale do Rio Doce, tentativa de privatização da Petrobras, concessões de blocos de petróleo, desmonte do Estado empreendedor e sua substituição pelo Estado regulador, "neutro" via agências ANEEL, ANP, ANATEL, financiamento das privatizações, mesmo para grupos estrangeiros, às vezes estatais, via poupança pública gerida pelo BNDES, promovendo apenas uma transferência da gestão do capital público para grupos privados.

A concepção estruturalista, gestada no âmbito da CEPAL, sob a liderança de Raul Prebisch, com forte participação de Celso Furtado, também propugnada pelo ISEB, pontificada por Ignácio Rangel, centra-se na proposta do desenvolvimento a partir de uma revolução capitalista nacional, associando empresários, trabalhadores e governo. >>>

Energia, Recursos Minerais e Desenvolvimento (cont.)

O socialismo poderia vir numa etapa posterior, como consequência do próprio desenvolvimento histórico da hegemonia capitalista. Pode-se identificar no governo Lula uma recuperação de elementos desta concepção, ainda que sem ruptura clara com a herança de FHC, uma simbiose com o neoliberalismo, reforçando a concepção da dependência associada. Lula manteve grande parte dos instrumentos institucionais criados para implementar e gestar aquela concepção mantendo: as agências reguladoras, os leilões de blocos de petróleo, o status quo da exploração mineral e gestão da Vale do Rio Doce, o caráter híbrido da Petrobras, como empresa com gestão controlada pelo governo mas operando com a lógica de petrolífera internacional, o papel do BNDES para financiar a presença de grupos estrangeiros em empresas concessionárias, entre outros. Por outro lado, agregou elementos da concepção estruturalista, ampliando, em geral com apoio do BNDES, dos grupos privados nacionais no petróleo (vide OGX), na energia elétrica, na agroindústria, nos biocombustíveis, na indústria alimentícia, fomentando a consolidação de grupos capitalistas brasileiros para atuação em escala internacional, principalmente na siderurgia, na indústria frigorífico-alimentícia, e no ramo contratista de obras públicas e de infraestrutura. Ampliou a instrumentalização dos recursos dos fundos de pensão, dos trabalhadores, para promover investimentos em aliança com os grupos privados em infraestrutura, petróleo, energia elétrica, telecomunicações, transportes, biocombustíveis, entre outros. Pode-se afirmar que o governo Lula foi um marco na consolidação das relações sociais capitalistas para organizar a produção e a vida social no Brasil, ainda que com a ampliação do papel de grupos nacionais.

A terceira concepção, também inspirada na análise de Gunder Frank – compreendendo o caráter incipiente da burguesia nacional e o seu traço entreguista e de associação com o imperialismo – propunha o desenvolvimento do país em bases socialistas, sem a necessidade da fase capitalista. Teve como seguidores iniciais Ruy Mauro Marini e Teotônio dos Santos, mas adquiriu relevância maior no debate político com a adesão de Florestan Fernandes. Identifica-se nesta concepção a inspiração das propostas defendidas pelo PT e pelos partidos que integravam a frente popular que construiu a eleição de Lula em 2002. Seu ocaso foi anunciado pela Carta aos Brasileiros e seu abandono ocorreu na prática do governo. Permaneceram apenas resquícios de sua inspiração nos discursos justificadores dos programas compensatórios como o Bolsa-família, às vezes sucumbindo a apelos mais populistas do que emancipadores.

A partir do reconhecimento da natureza destas três concepções, presentes nos debates sobre o caráter e o processo de desenvolvimento nacional nas práticas dos governos recentes, as análises e propostas deste texto, explicitamente, guardam vínculos com os valores e princípios da terceira concepção, não obstante o avanço das estruturas institucionais e políticas baseadas nas primeiras. Ainda persistem na sociedade brasileira espaços extraordinários para promover o direcionamento dos benefícios oriundos da apropriação social dos recursos naturais – pontificados pelo petróleo e gás natural, potenciais hidráulicos e eólicos, urânio, minérios de ferro, alumínio, nióbio, manganês, terras raras, além do acesso à terra – para a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social, capaz de extirpar as assimetrias sociais e regionais, de promover a autonomia dos cidadãos, resgatando os valores da liberdade, igualdade e fraternidade. A ideia fundadora da proposta baseia-se na criação de mecanismos de apropriação destas rendas – que se originam principalmente da natureza e do regime de propriedade dos recursos sobre os quais são aplicados os esforços de produção, dando luz a lucros suplementares e ganhos extraordinários, ausentes dos processos capitalistas de produção em condições normais – e sua destinação para fins públicos.

A construção de uma estrutura concreta de apropriação social destes recursos naturais com esta finalidade somente será possível com a mobilização da plena capacidade da engenharia e dos engenheiros brasileiros, onde a capacitação profissional deverá ombrear com atuação na esfera das políticas públicas nacionais. No momento atual da história brasileira, está no palco do debate a definição sobre o destino, privado ou público, dos benefícios da apropriação dos recursos naturais, que adquirem o caráter, normalmente oculto, das rendas do petróleo, dos potenciais hidráulicos, da renda da terra na produção de alimentos e biocombustíveis, e da renda dos recursos minerais.

O movimento hegemônico em curso, aliando grupos privados nacionais, multinacionais com setores dos partidos políticos, está pendendo para a apropriação majoritariamente privada destes benefícios. Somente uma ação concertada de forças populares organizadas no âmbito dos sindicatos, federações, movimentos sociais poderá reverter esta tendência. Objetivamente, a maior diferença em termos de desenvolvimento econômico entre os governos FHC e Lula está na conjuntura internacional, que elevou os preços das commodities, como petróleo, minérios de ferro e alumínio, e dos produtos agrícolas, que após a autossuficiência em petróleo, permitiu que uma fração das rendas, do excedente econômico associado a esta nova situação, circulasse pela economia brasileira, embora principalmente do lado do capital. Esta tendência de acumulação privada das rendas, com suas consequências e aniquilação de caminhos alternativos se manterá, caso não haja esta ação concertada das forças populares organizadas. [Leia o texto na íntegra.](#)

[9º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros – Consenge].

Brasil: Decisão em Carajás: lago ou minérios?

Lúcio Flávio Pinto, Jornalista paraense. Publica o Jornal Pessoal (JP)

Em 1967, um pequeno grupo de geólogos, contratados por aquela que era então a maior siderúrgica do mundo, a United States Steel, confirmou em pesquisa de campo: 500 quilômetros ao sul de Belém, a 900 quilômetros do litoral norte, em plena selva amazônica, havia a melhor jazida de minério de ferro do planeta.

Carajás era um paraíso. O minério mais usado pelo homem desde tempos imemoriais aflorava no alto dos platôs cobertos por vegetação rasteira, em altitudes que chegavam a 600 metros. As encostas eram tomadas, em grande densidade, por árvores altas, que se espraiavam por todas as direções. Circundando as serras, dois rios portentosos – o Itacaiúnas e o Parauapebas – serpenteavam suas águas. A fauna era rica, exuberante. Aquele lugar merecia servir de imagem para o Éden.

Originalmente, esse enorme depósito de ferro devia ser levado para os Estados Unidos, como, em décadas anteriores, ocorrera com o manganês do Amapá, minério vital para a siderurgia. Mas quando a US Steel se retirou do empreendimento, em 1977, a estatal Companhia Vale do Rio Doce, que sucedeu a multinacional americana, desviou o rumo para o Oriente. A hematita do Pará atravessaria 20 mil quilômetros de mares e iria preferencialmente para o Japão, até então abastecido pela Austrália, que estava quatro vezes mais próxima.

Em 2007 a Vale, privatizada 10 anos antes, comemorou o primeiro bilhão de toneladas produzidas em Carajás. Dava a média de 45 milhões de toneladas por ano. Nos primeiros anos após a inauguração da mina, em 1984, a produção não fora além de 25 milhões de toneladas, que era a meta do projeto. Nos anos imediatamente anteriores ao 1º bilhão, a produção foi de 90 milhões de toneladas.

Neste ano já devia passar para 130 milhões, mais de um terço de toda a produção da Vale, que é a segunda maior mineradora do mundo (depois da anglo-australiana BHP Billiton) e a maior vendedora de minério de ferro que circula pelos oceanos. Mas desde 2006 a produção não cresce, derrubando as metas quantitativas fixadas pela empresa.

Era porque a Vale não conseguia liberar seus novos projetos em Carajás. Só no final do mês passado, depois de 10 anos sem expedir qualquer documento para a companhia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis aprovou o licenciamento ambiental para o funcionamento da quinta mina na parte norte da jazida.

O ato foi muito comemorado, mas dele não resultará qualquer modificação na escala da extração. Melhorará apenas a qualidade da mercadoria, já que a mina liberada contém minério de melhor teor do que o das minas já em exploração e algumas a caminho da exaustão.

Para a Vale, o mais importante é se essa aprovação indicar a tendência do Ibama de repetir o licenciamento, talvez ainda neste ano, de uma nova área de mineração, ao sul das minas que estão em atividade há quase 30 anos. A Serra Sul tem mais e melhor minério. Por isso proporcionará à Vale dobrar a atual produção. Mas também é uma paisagem ainda mais deslumbrante e rara.

No conjunto de serras do sul do distrito mineral há um belo e profundo lago perene. Talvez não haja um só igual em todas as zonas mineiras do planeta. Há várias cavernas, nas quais o homem viveu, a partir alguns milhares de anos atrás. São testemunhos arqueológicos valiosos. Um antigo gerente de Carajás quis dinamitar cavernas da Serra Norte, que abriram um novo capítulo para a reconstrução da presença humana na Amazônia. Foi contido.

Desde então, cavernas têm que permanecer intocadas em áreas de mineração. Se assim continuar, Serra Sul não poderá existir. Mas ela é um projeto de oito bilhões de dólares (10% desse total previstos para uso neste ano). Ao preço de hoje, permitiria à Vale faturar mais do que US\$ 10 bilhões por ano, mandando 60% de toda a sua produção para a China.

São quantidades de causar impacto, como vem acontecendo em Carajás desde 2001, quando os chineses, que até então eram um cliente de pouca significação (compravam 5% do minério da Vale), começaram a avançar sobre as montanhas de minério rico. Suplantaram seus vizinhos japoneses e agora pesam nos destinos da Vale –e do Brasil– como, talvez, nenhum outro país em toda a história nacional.

Graças a isso, no ano passado o lucro líquido da Vale representou quase 10 vezes mais do que os US\$ 3,3 bilhões pagos em 1997 ao governo pelo controle acionário da estatal, a jóia da coroa das privatizações realizadas a partir do governo Collor (e só na aparência interrompidas pela administração do PT, aparência desfeita de vez pela alienação de três aeroportos até então oficiais).

Quase metade dos US\$ 30 bilhões de lucro de 2011 serão investidos pela Vale neste ano. O principal empreendimento é o de Serra Sul, que praticamente recomeça a história de Carajás e dá um salto (talvez mortal) nas transações com a China. Cavernas e lago terão vez nessa agenda de cifrões?

Brasil: Vale no banco dos réus

Sergio Ferrari y Beat Tuto Wehrle

O escândalo explodiu nos últimos dias; porém, está apenas começando. Diversos meios de comunicação suíços denunciaram, no final de fevereiro, ao gigante brasileiro Vale do Rio Doce que, escapando do fisco de seu país, instalou, em 2007, sua sede mundial em Saint-Prex, no cantão suíço de Vaud, para aproveitar as prerrogativas locais.

Primeira constatação: de 5 anos até hoje, a Vale conseguiu livrar-se de toda obrigação impositiva.

Segunda constatação: A Vale deve ao Estado brasileiro cifras milionárias em conceito de impostos não pagos no Brasil.

Terceira constatação: essas novas denúncias reconfirmaram o voto da sociedade civil planetária que, em janeiro passado, concedeu a Vale o prêmio "Public Eye Award", a pior empresa do mundo.

A Vale, segunda multinacional mineradora do mundo e primeira na exploração de ferro em âmbito planetário, ao instalar-se na Suíça, declarou um "benefício previsível" para 2006 de apenas 35 milhões de dólares, cifra que serviu de referência para taxar o montante de seus impostos.

No entanto, a posteriori, a declaração de benefício da Vale para esse mesmo ano superaria os 5 bilhões de dólares.

Não somente a Vale subestimou ante o fisco suíço o montante a ganhar, como se beneficiou das facilidades do sistema impositivo suíço para empresas –e, em particular, da cláusula Bonny- que premia as grandes multinacionais que querem instalar-se nessa nação alpina.

Ao estabelecer-se na Suíça, a Vale conseguiu uma exoneração por dez anos de 80% dos impostos federais e 100% dos comunais e cantonais (provinciais ou departamentais). "Na Suíça, há cinco anos, a Vale não pagou nem um só franco de impostos", divulgava o diário "24 Heures", em sua edição de 28 de fevereiro, recordando que a multinacional instalou-se em 2006 como "sede europeia". Poucos meses depois, Saint-Prex convertia-se na central mundial do grupo Vale.

No momento de albergar-se nesse país europeu, a multinacional escapava do fisco brasileiro. Durante o tempo que teve sua sede no Rio de Janeiro, entrou em uma disputa jurídica com as autoridades impositivas do país sul-americano, que lhe exigem o pagamento da chamada "Contribuição Social sobre o Lucro Líquido". As autoridades brasileiras obtiveram várias vitórias jurídicas contra a multinacional. No entanto, ainda hoje está tem dívidas com o Estado que, segundo as distintas fontes, oscilam entre 5 bilhões e 15 bilhões de dólares.

O que a Vale faz "é pirataria fiscal", denuncia a organização suíça "Declaração de Berna", que, juntamente com Greenpeace, concede o prêmio "Public Eye" (olhar cidadão).

Para a Vale, nada vale... [quanto às leis...]

O atual grupo Vale é a versão internacionalizada da antiga empresa pública Companhia Vale do Rio Doce, privatizada em 1997, no marco das reformas neoliberais impulsionadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.

O preço desvalorizado de sua "venda-presente" foi, na época, de 3.5 bilhões de dólares. Um verdadeiro roubo à mão armada ao erário público brasileiro.

Para medir a dimensão desse assalto, basta comparar o valor da venda com os lucros anuais do grupo. Segundo a declaração de seus próprios diretores, somente em 2011, os benefícios líquidos oscilaram nos 23 bilhões de dólares, ou seja, quase 7 vezes o valor nominal da privatização, em 1997.

Segundo relatórios oficiais da multinacional, em 2011, distribuiu a seus acionistas em torno de 12 bilhões de dólares -9 deles em lucros e 3 em recompra de ações-; isto é, um montante total duas vezes e meia superior ao preço da privatização de 1997.

A multinacional opera hoje em 30 países, de cinco continentes. Entre eles, China, Índia, Angola, África do Sul, Austrália e Colômbia. Realiza acordos nessa estratégia de expansão mundial com gigantes financeiros como a União de Bancos Suíços e o Crédito Suíço.

É a 14ª companhia no mundo no valor do mercado e a primeira empresa privada do Brasil. Além da mineração, sua presença estende-se à infraestrutura e energia, entre outros setores. É proprietária de 1.800 quilômetros de linhas de trem e de dois portos marítimos no Pecém (Estado do Ceará) e Itaqui (Estado do Maranhão), respectivamente.

Conta também com uma agressiva política de imagem/marketing que tenta apresentá-lo como um grupo empresarial patriota e paternal. Para isso, a empresa emprega somas milionárias em publicidade. Somente em 2008, sua campanha publicitária para "limpar" sua imagem oscilou entre os 90 milhões de dólares. (...) (ADITAL< 02.03.2012)

América Latina: el salvador de multinacionales

UN MERCADO DINÁMICO DONDE AUMENTA EL CONSUMO

En la región logran ganancias que no logran ni en sus países de origen.

América Latina pasó a ser una suerte de flotador de las empresas multinacionales de varios rubros, desde los dentífricos hasta las finanzas, que logran en la región ganancias esquivas en otras partes, aun en sus países de origen. Uno de los casos recientes más notorios ha sido el banco español Santander, que en el 2011 tuvo un beneficio neto 35% menor al año anterior y por primera vez reunió en Latinoamérica más de la mitad de sus ganancias.

La región fue además un mercado creciente para empresas como el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles, Nokia, o la gigante de los dentífricos Colgate-Palmolive, cuyos beneficios a nivel global cayeron.

El fenómeno coincide con un incremento del consumo en América Latina, donde el PIB per cápita creció 3,2% en el 2011 según la CEPAL, mientras Europa y Estados Unidos enfrentaban dificultades económicas.

“Hay más dinamismo económico en América Latina que en los países de origen de esas compañías”, dijo Gilmar Masiero, experto en internacionalización de empresas en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de San Pablo. Pero explicó que las multinacionales también suelen encontrar en los mercados latinoamericanos mayor protección y menor competencia que en otras partes.

“Lo que explica las ganancias más elevadas en estos lados del mundo que en sus países de origen es la poca competencia que tienen”, dijo Masiero a BBC.

América Latina es, con Europa del Este, Asia y África, una de las regiones donde las empresas del mundo esperan crecer más este año, reveló una encuesta de PwC entre unos 1.200 gerentes generales de los cinco continentes.

El sondeo indicó además que Brasil es el tercer país que genera más expectativas para los empresarios, detrás de China y Estados Unidos.

TIERRA DE OPORTUNIDADES

La idea de que Latinoamérica es una tierra de oportunidades para muchas empresas con presencia global pareció reflejarse en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a fines del mes pasado. Los gobernantes y funcionarios latinoamericanos presentes en ese encuentro mantuvieron apretadas agendas de encuentros con representantes de diversas multinacionales.

GANANCIAS

Las ganancias de empresas extranjeras en América Latina están lejos de ser algo nuevo, pero es llamativo su contraste con las dificultades que enfrentan algunas en los países desarrollados. El fenómeno se refleja en los balances difundidos por firmas internacionales que aprovecharon su crecimiento en el mercado latinoamericano para sostener ganancias o reducir pérdidas.

Colgate, por ejemplo, informó que en el último trimestre del 2011 sus ganancias operativas crecieron 14% en América Latina, su mayor mercado de ventas, mientras caían 11% en Norteamérica.

Las ventas latinoamericanas de la finlandesa Nokia crecieron 5% el año pasado (46,1 millones de teléfonos móviles comercializados), pero a nivel global retrocedieron casi 8,9% comparadas con el año anterior (en EEUU se hundieron 65%) cortando sus beneficios netos a la mitad. Telecom Italia reportó un aumento de sus beneficios netos de casi 33% en los primeros nueve meses del 2011 gracias a sus negocios en América Latina (Brasil y Argentina) y a pesar de una caída de sus ingresos en casa. La española Telefónica, la mayor empresa del ramo en Europa, aumentó en ese mismo período 18% sus ventas en América Latina, donde reúne casi la mitad de sus ganancias. (BBC Mundo) (La Nación – PY, 13.02.2012)

Argentina: Malos tiempos para las empresas españolas

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a poner en solfa a las compañías españolas en su país

Soplan malos tiempos para las empresas argentinas de capital español (también para las otras). El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene en la mira de la expropiación a YPF Repsol y no le quita la vista, para mantener a raya, al resto de las multinacionales (Telefónica, Gas Natural, Abertis...). Tarifas semicongeladas, inflación, problemas con las importaciones o prohibición de reparto de dividendos —el que los tiene— son algunos de los males que se reparten los grandes y medianos inversores. Uno de los casos más preocupante es el de Edesur y Costanera, filiales de Endesa que, hoy por hoy, si la situación no cambia, contemplan entrar en concurso de acreedores a mediados de año.



«Nos encontramos en estado terminal. Como se dice en Argentina, estamos en el horno», confiesa desolado un alto cargo de Edesur. «Las pérdidas globales —de ambas firmas— ascienden a más de 640 millones de pesos (unos 144 millones de euros). De aquí a junio nos quedamos sin fondos. No podremos afrontar las deudas. No vamos a tener más remedio que declarar el concurso de acreedores».

El escenario de Endesa en Argentina es el resultado de una acumulación de factores. «En 2011 el Gobierno nos obligó a realizar un plan extraordinario de inversiones sin permitirnos aumentar las tarifas para poder sobrevivir», continúa el ejecutivo. «Las cuentas que hacen no se corresponden con la realidad. Su ecuación es coste de producción más rentabilidad, si la hubiera, es igual a tarifa más subsidio», explica. «El problema es que los costos se han disparados y los números, pese a las subvenciones, no cuadran».

Para ilustrar el caso, pone un ejemplo: «En Edesur, solo en sueldos de personal hemos pasado en el último año de 485 millones de pesos (cerca de 87 millones de euros) a 759 (unos 135 millones). La tarifa de Argentina es la más barata de América Latina junto con Venezuela. Aquí se cobra 38 dólares por megavatio hora, mientras que la media de los países iberoamericanos es de 131». La comparación de precios con el exterior tiene su réplica de puertas adentro. «En Buenos Aires cobramos 19 dólares mientras que en el Chaco la tarifa es de 57. Lo curioso es que esta provincia es una de las más pobres del país pero el agravio comparativo se extiende a todo el interior. Allí las empresas son provinciales y los gobernadores no pueden regalar, tienen que cuadrar sus cajas y cobrar lo que vale el servicio».

«La única solución que tenemos es un sinceramiento de tarifas. Tras la crisis de 2001, se hicieron adaptaciones leves en 2008 y, desde entonces, no se han movido. En estos últimos cuatro años hemos tenido una inflación anual del 25%, es decir, global del 100%. Nuestros costos han aumentado el 100%». >>>>>>

Argentina: Malos tiempos para las empresas españolas (cont.)**Cristina Fernández de Kirchner tiene en la mira la expropiación de YPF a Repsol**

La agonía de Endesa, a través de Edesur y Costanera, es excepcional. «Nosotros sí tenemos beneficios», confía una fuente de Telefónica. «Nos gustaría actualizar las tarifas —también fijas desde hace una década larga— pero nos aliviarnos con los servicios de internet (contenidos de cine, series, e-book, home vídeos) y de telefonía celular», reconoce. «No nos quejamos, invertimos mucho y tenemos buenos resultados. Hoy por hoy no podemos repatriar dividendos pero tampoco nos han dicho que no podamos hacerlo nunca más», reflexiona, optimista, la misma fuente. «Lo que nos preocupa ahora es un posible desabastecimiento de tecnología por las restricciones a las importaciones. En 2011 ya tuvimos faltante de Black Berry. Los aparatos se ensamblan en la provincia de Tierra del Fuego (Patagonia profunda) pero si continúan bloqueando la entrada de componentes podemos tener en breve un problema serio». El otro y más acuciante, «es el de la inflación. Eso nos mata y ni hablar de las próximas “paritarias” (convenios colectivos)».

Gas Natural Fenosa de Argentina fue la primera empresa de servicios públicos en renegociar sus tarifas tras la hecatombe de 2001. A cambio, como el resto, retiró la demanda contra el Estado en el Ciadi (tribunal internacional que depende del Banco Mundial). Desde entonces, «el incremento que ha registrado el usuario en su factura fue de un 10% en 2007», explica la portavoz de la empresa. «El pliego de renegociación contemplaba ese incremento como un adelanto a cuenta del sinceramiento real del valor del servicio. De acuerdo al calendario que acordamos, ahora deberían actualizarse, de forma integral, las tarifas. Estamos esperando la resolución administrativa que lo concrete. Debería salir ya pero no tienen plazo para pronunciarse».

Gas Natural Fenosa tiene el 50,4% de la filial argentina. Es la única distribuidora de gas de Argentina que da beneficios (más de cuatro millones de euros). «Nuestra deuda bancaria y financiera es en pesos argentinos. No tenemos que afrontar obligaciones con entidades extranjeras o en divisas», puntualiza la misma fuente. No es el caso de Ypf Repsol o, en rigor, de la familia Esquenazi, el socio argentino que el matrimonio Kirchner impuso a la compañía —sin que desembolsara un céntimo— que dirige Antonio Brufau. «Cometieron el pecado de repatriar dividendos en diciembre pese a la prohibición del Gobierno. Desde entonces —confía una fuente próxima a Repsol— están en la cuerda floja».

«Uno de los suyos»

Los Esquenazi eran los banqueros de confianza del difunto Néstor Kirchner. A finales del pasado año la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ponía como ejemplo la compañía y trataba a Antonio Brufau como si fuera uno de los suyos. Hoy las cosas han cambiado. Brufau tiene cerradas las puertas de la casa Rosada.

Un par de semanas atrás, el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, trató el problema de YPF Repsol y del resto de las inversiones españolas con el ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman. «Con la presidenta nunca me entrevisté. Ni lo pedí, ni estaba previsto», aclara. El canciller argentino coincidió en la necesidad de mantener, «un diálogo sincero, de confianza mutua y transparencia para buscar soluciones».

El pasado lunes, José Manuel Soria, ministro de Industria español, viajó a Buenos Aires. El insistente rumor de que Cristina Kirchner podía declarar de interés público las reservas de hidrocarburos o expropiar YPF —como había amenazado—, había cruzado fronteras. Soria se entrevistó con su homólogo argentino, De Vido, y con el titular de Economía, Lorenzino.

Cuando Soria volaba a Buenos Aires, en Buenos Aires la prensa barajaba diferentes fórmulas de expropiación, «incluida, con los rumores que hicieron desplomarse la acción, una compra masiva en bolsa», confía una fuente bien informada. El silencio de la presidenta durante el discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas, se interpretó como un éxito de los buenos oficios de Soria. *(carmen de carlos) (ABC.es)*

Amazonia en peligro por multinacionales europeas

Nuestra casa es el mundo, quienes nos consideramos ecologistas sabemos que el daño que se hace a cualquier parte del planeta, es daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos.

Por eso es tan importante no negarse a ver una realidad contundente como lo es la construcción de mega-proyectos perjudiciales para el hombre y el medio ambiente en los países en vías de desarrollo.

Multinacionales europeas, que ya no engañan a nadie en el primer mundo, pretenden robar ahora a los más necesitados. Claro que la principal responsabilidad la tienen los gobiernos de los países que permiten esa cruel intrusión de empresas extranjeras, que en realidad nada bueno deían a los pueblos nativos.



Tal es el caso de los proyectos de hidroeléctricas de Endesa. Los pueblos sudamericanos no quieren que sus ríos y territorios sean pasados por encima para enriquecimiento de unos pocos. La PATAGONIA NO QUIERE REPRESAS, TAMPOCO QUIEREN HIDROELECTRICAS DE ENDESA EN LA SELVA AMAZÓNICA.

Una gran reserva de selva colombiana está en grave peligro. El tratado de libre comercio hará posible que grandes multinacionales hagan estragos en zonas protegidas del planeta. Si los campesinos y pobladores nativos no tienen el poder suficiente para frenar este desastre (ya han sido agredidos por las fuerzas del orden por protestar pacíficamente), tú puedes ayudar apoyándolos desde casa.

El proyecto hidroeléctrico de la presa El Quimbo ya ha sustraído 750 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia. Ahora pretenden desviar el curso del río grande de La Magdalena, que recorre gran parte de Colombia. El río es utilizado para el transporte fluvial de personas y mercancías y otorga fertilidad a los valles que lo circundan por más de 1.500 kilómetros. La obra significaría no sólo destruir la naturaleza sino también la riqueza arqueológica, social, cultural e histórica.

Por eso es importante que NO SE RATIFIQUE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA que permitirá que se realicen con impunidad este tipo de aberraciones ecológicas. Apoya la iniciativa de Salva la Selva en

<https://www.salvaselva.org/mailalert/845/multinacionales-europeas-destruyendo-la-amazonia-colombiana>

Vea el vídeo del desalojo, el vídeo que el gobierno colombiano no quiere que veamos y que más de 225.000 personas ya han visto:



NO ratificación del tratado UE-Colombia / Perú

Carta conjunta de la CET, la CSA, la CSI y el CGS al Parlamento Europeo

por CET, la CSA, la CSI y el CGS

El pasado 29 de febrero se realizó en la Comisión de Comercio Internacional un primer intercambio en Audiencia Pública sobre el Tratado Comercial negociado por la UE con Colombia y Perú como antesala al proceso de ratificación.

Previamente las Confederaciones Sindicales mencionadas enviaron una carta a los Eurodiputados solicitando la NO ratificación del Acuerdo (Traducción Libre)

Señores miembros del Parlamento Europeo:

En representación de la Confederación Europea de Sindicatos-CES (ETUC), de la Confederación Sindical de las Américas- CSA (TUCA), de la Confederación Sindical Internacional-CSI (ITUC), del Concejo Global de Sindicatos (CGU), nos dirigimos a Uds. para compartir nuestra preocupación por el proyecto de Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Colombia y Perú.



Como resultado de la permanente violencia en Colombia y la violación de los derechos humanos y laborales, así como del debilitamiento de la Comunidad Andina a causa de acuerdos independientes de comercio con la Unión Europea en lugar de unas relaciones de conjunto con el bloque de naciones, la Confederación Europea del Trabajo y la Confederación Sindical de las Américas hacen un llamado a los legisladores a oponerse al TLC de la Unión Europea con Colombia y Perú. Nos reafirmamos en nuestra declaración conjunta de 2011 que hacía un llamado a votar en contra del Tratado por estas razones.

La realidad cruda

A pesar de un saludable cambio en la retórica del gobierno de Santos y de la negociación de un Plan de Acción Laboral entre Estados Unidos y Colombia, acordado en abril de 2011, la realidad concreta para los trabajadores colombianos sigue siendo del todo inaceptable. Continúan los asesinatos de dirigentes y activistas sindicales, las amenazas, la intimidación, y los crímenes en total impunidad.

En Colombia sigue existiendo una exclusión sistemática de los trabajadores y de los sindicatos debido a sobrecogedores niveles de violencia, elevados niveles de impunidad para los responsables de estos crímenes, al mismo tiempo que las leyes y la política laboral deliberadamente continúa socavando el libre ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo, incluyendo el de libre asociación. Como resultado, menos del 5% de los trabajadores colombianos están sindicalizados y menos del 2% se encuentran cobijados por una convención colectiva de trabajo.

La violencia antisindical se mantiene en niveles alarmantes. En 2011 fueron asesinados por lo menos 29 dirigentes sindicales y activistas. En muchos casos los responsables fueron paramilitares "desmovilizados" que se han reorganizado en nuevas organizaciones criminales encargadas de continuar su sangriento legado. Diez más fueron objeto de atentados fracasados contra sus vidas. Por lo menos tres sindicalistas han sido asesinados solamente hasta enero de 2012. Así el total de asesinatos desde que se llevan estadísticas en 1986 asciende a más de 2.900. Cada año, cientos de sindicalistas reciben también amenazas directas de muerte, en 2011 fueron 342, las cuales frecuentemente producen el efecto de congelar el derecho de asociación cuando los sindicalistas se enteran de que estas amenazas casi siempre se cumplen. Los esquemas de protección disponibles para los sindicalistas son deficientes.>>>>

NO ratificación del tratado UE-Colombia / Perú (cont.)

El 17 de enero de 2012 dos asesinos a sueldo entraron a la casa de Mauricio Redondo, líder sindical de la Unión sindical Obrera (USO). Dispararon múltiples tiros contra Redondo y su compañera, Janeth Ordóñez, en un asesinato a sangre fría, hecho que dejó huérfanos a cinco niños. Los dos, Redondo y Ordóñez, eran activistas en la localidad a favor de los obreros. Siguió la tortura y muerte a golpes del sindicalista Víctor Manuel Hilarión Palacios el 9 de enero, asesinado por el ejército cuando se dirigía al trabajo en Río Nevada.

Según el informe de Human Rights Watch, la tasa de impunidad en estos asesinatos llega al 90 por ciento. Pero es más alta cuando se consideran las numerosas fallas en las sentencias que se han llevado a cabo y el hecho de que numerosas sentencias no concluyen en detención carcelaria. En 2011 el informe de la Misión de Alto Nivel sobre Colombia confirmó que “la impunidad ha prevalecido en Colombia por un largo período de tiempo y ha causado un inmenso daño al país y sufrimiento a su pueblo” y que “la gran mayoría de los casos de homicidio han quedado sin resolver”. Las recientes promesas gubernamentales de mejorar tanto la cantidad como la calidad de las investigaciones y procesos que en efecto reduzcan el nivel de impunidad quedan a la espera de que verdaderamente se cumplan.

Finalmente, las leyes laborales del país y el fallo en aplicarlas efectivamente, constituyen una barrera enorme para el ejercicio de la libertad de asociación y la práctica del derecho de negociación colectiva. La Misión de Alto Nivel ha publicado en numerosas ocasiones observaciones detalladas del fallo de las leyes que se han quedado cortas en la aplicación de las Convenciones del 87 y 98—ratificadas por Colombia. Entre las prácticas más destructivas está la de conformación permanente de cooperativas de trabajo asociado, así como la existencia y aparición de otras formas de empleo disfrazado que despojan a los trabajadores de sus derechos fundamentales. Aunque el Gobierno ha expedido recientemente normas y regulaciones que buscan sancionar el uso ilegal de cooperativas, el fallo en prohibir de manera efectiva otras formas de empleo indirecto le ha permitido a los empleadores ingeniarse nuevos tipos de empleo que tienen el mismo impacto desfavorable para los trabajadores.

El capítulo de Desarrollo Sostenible es inadecuado para garantizar los derechos

La CET, la CSA, la CSI y el CGS consideran que el Tratado y el capítulo de Desarrollo Sostenible no proporcionan las bases sólidas requeridas para asegurar el respeto de los derechos humanos y sindicales. En particular el Tratado falla en especificar medidas que contribuyan a mejorar el cumplimiento de los derechos humanos o a estipular acciones requeridas en casos de complicidad o tolerancia de las violaciones a los derechos humanos. Las medidas del capítulo de Desarrollo Sostenible no se consideran exigibles en forma efectiva, porque ese capítulo no está sujeto al mismo procedimiento de los puntos en discusión que el resto del Tratado de Libre Comercio, sino que queda para meras consultas. Además, no queda claro si las medidas de derechos humanos serían exigibles si el Tratado entra en ejecución en forma provisional.

De conformidad con el documento “Valoración sobre el impacto de sostenibilidad” preparado a petición de la Comisión Europea, el acuerdo no contribuiría a un crecimiento y desarrollo fuerte y sostenible ni en la Unión Europea ni en Colombia. Por el contrario, este documento concluye que la expansión del comercio resultante del Tratado agravaría los conflictos internos en Colombia y pondría una inmensa presión sobre sus recursos.

Consideramos que un voto en favor del Tratado entre la Unión Europea y Colombia haría caso omiso del terrible record sobre derechos humanos en Colombia y perjudicaría la reputación de la Unión Europea como una fuerza líder en la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En verdad, constituiría un apoyo a las espantosas violaciones del derecho al trabajo en el país más peligroso del mundo para los sindicalistas y debilitaría la presión sobre el gobierno colombiano para que cumpla sus obligaciones de derechos humanos. Por tanto, solicitamos a los miembros del Parlamento Europeo que no apoyen el Tratado en este momento.

Agradeceríamos que pudiéramos recibir sus puntos de vista sobre este asunto y esperaríamos su respuesta. Los obreros de Colombia cuentan con su apoyo.

Atentamente,

Bernardette Segol Secretaria General Confederación Europea de Trabajo

Sharan Burrow Secretaria General Confederación Sindical Internacional

Víctor Báez Mosqueira Secretario General Confederación Sindical de las Américas

Peter Waldorff Secretario General de Servicios Públicos Dirección del Concejo Global de Sindicatos

22 de febrero de 2012

Inglaterra acusó Argentina

Inglaterra acusó al gobierno argentino de desarrollar una política de "confrontación"

Un vocero de David Cameron, consideró esta mañana "contraproducente" la medida que insta a compañías locales y multinacionales a sustituir la compra de insumos británicos por productos de terceros países. Consideró "triste" la iniciativa que difundió ayer la ministra de Industria, Débora Giorgi.

El gobierno pidió que se dejen de importar productos británicos

El Reino Unido acusó hoy al gobierno argentino de desarrollar una "política de confrontación" por las Islas Malvinas, luego de que el Ministerio de Industria instara a compañías locales y multinacionales a sustituir la compra de insumos británicos por productos de terceros países.

Steve Field, vocero del primer ministro británico, David Cameron, consideró esta mañana "contraproducente" la medida y advirtió que Londres es un "gran importador" de productos argentinos, por lo que la decisión es contraria a los propios intereses económicos del país.

El vocero ministerial dijo además que la Cancillería trató el tema con la embajada argentina en Londres y consideró "triste" la iniciativa que difundió ayer la ministra de Industria, Débora Giorgi.

Ayer, un comunicado de la cartera fabril reportó que la funcionaria se comunicó con los titulares y directivos de al menos 20 firmas nacionales y multinacionales que importan productos e insumos desde el Reino Unido para que elijan otras naciones desde donde importar esa mercadería.

Fuentes de la cartera fabril explicaron que "el objetivo es impedir que se siga reduciendo el superávit que todavía mantiene nuestro país con el Reino Unido y establecer políticas que privilegien las relaciones comerciales con las naciones que respetan la integridad territorial, sus reclamos soberanos y los recursos que pertenecen a la Argentina".

El gobierno nacional argumentó que las importaciones desde el Reino Unido aumentaron 40 por ciento interanual en el lapso enero-noviembre de 2011, por lo que el saldo comercial favorable bajó en un año de 274 millones de dólares a 104 millones.

Al ser consultado por la sugerencia ministerial, Field contestó: "Es claramente muy triste que la Argentina continúe con su política de confrontación, en lugar de una de cooperación".

La medida de la Casa Rosada se produjo en medio de una escalada bilateral y cuando falta poco más de un mes para que se cumpla el 30° de la guerra de 1982 por el archipiélago, conflicto en el que murieron más de 900 efectivos.

A comienzos de mes, el gobierno denunció a Londres ante las Naciones Unidas por la presunta "militarización" del Atlántico Sur, a lo que la administración de Cameron respondió que el envío de un buque destructor obedece a una "rutina".

El lunes, en tanto, se produjo otro hecho que causó malestar en el país europeo.

Dos cruceros con bandera de colonias británicas provenientes de las Islas Malvinas y de recorrida por el Cono Sur se vieron impedidos de amarrar en Ushuaia, por la aplicación extensiva de una norma que impide el atracado de embarcaciones de guerra y de naves vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales. (*la capital*, 29.02.2012)



O **Multi Noticias** es un boletín electrónico auspiciado por el *FES Sindical Regional* que tiene como objetivo fornecer más elementos de subsidio a las organizaciones sindicales, principalmente para las que están en los países del Cono Sur, sobre las principales actividades y políticas de las empresas multinacionales – las globales y las multilatinas– bien como del movimiento sindical.